

Comentarios a la transposición de la Directiva
2016/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la
Distribución de Seguros

Comments on implementation of the
Directive 2016/97 of the European Parliament
and of the Council of 20 January 2016 on
Insurance Distribution

Febrero 2020 - February 2020

**Hogan
Lovells**

Coordinadora



Virginia Martínez

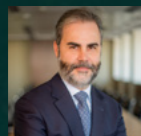
virginia.martinez@hoganlovells.com

Autores



Joaquín Ruiz Echauri

joaquin.ruiz-echauri@hoganlovells.com



Luis Alfonso Fernández

luisalfonso.fernandez@hoganlovells.com



Virginia Martínez

virginia.martinez@hoganlovells.com



Jorge Etreros

jorge.etreros@hoganlovells.com



Virginia Domínguez

virginia.dominguez@hoganlovells.com



El equipo en España de Seguros y Reaseguros de Hogan Lovells ha sido distinguido tanto por Chambers Europe como por Legal 500 en "banda 1" (máximo reconocimiento a un despacho de abogados) durante los seis últimos años.

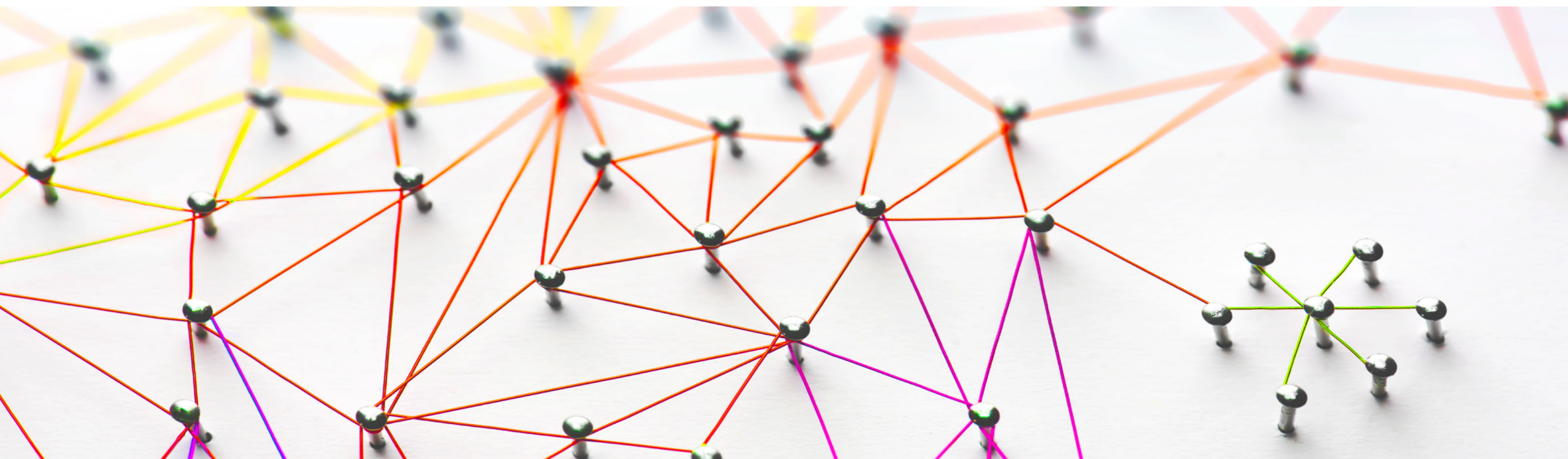
Formado por 23 abogados trabajando íntegramente para el sector, muchos de sus componentes han sido galardonados individualmente por distintos directorios (Chambers & Partners, Legal 500, Who's Who Legal, Best Lawyers y JUVE, entre otros).

Contenido

1. Objeto y ámbito (objetivo y subjetivo). Clasificación de distribuidores (mediadores de seguros y aseguradoras) y colaboradores externos	6
2. Actividad de los distribuidores de seguros y reaseguros	10
3. Requisitos de formación y mecanismos de solución de conflictos	20
4. Obligaciones de información y normas de conducta	23
5. Ventas combinadas y vinculadas	26
6. Control de productos y requisitos en materia de gobernanza	27
7. Competencias de ordenación y supervisión y régimen sancionador	28
8. Actividad de los mediadores de seguros y reaseguros domiciliados en España en régimen de LPS o DE en otros Estados de la UE	35
9. Actividad en España de los mediadores de seguros y reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados de la UE. Normas de interés general aplicables a los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados Miembros de la Unión Europea	36
10. Breve mención a algunas Disposiciones Transitorias, Finales y Derogatoria	37

Content

1. Scope (objective and subjective). Classification of distributors (intermediaries and insurance undertakings) and external collaborators	40
2. Activity of the insurance and reinsurance distributors	43
3. Training requirements and conflict resolution mechanisms	51
4. Information duties and conduct rules	53
5. Cross-selling	57
6. Product oversight and governance requirements	58
7. Rules and supervision competencies and regime of offences and penalties	58
8. Activity of the insurance and reinsurance intermediaries domiciled in Spain under FOS and under FE regime in other EU Member States	65
9. Activity in Spain of the insurance and reinsurance intermediaries domiciled in other EU States. General good rules applicable to the insurance and reinsurance intermediaries resident or domiciled in other EU Members	66
10. Brief mention of certain Transitory, Final and Derogatory Provisions	68



Comentarios a la transposición de la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la Distribución de Seguros

El pasado 4 de febrero de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea (“UE”) en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante, “RDL 3/2020”).

Entre las diferentes Directivas que se transponen por esta norma, destaca la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la Distribución de Seguros (la “DDS”), cuyo objeto es (i) establecer las normas de acceso a las actividades de distribución de seguros; (ii) regular las condiciones en que dicha actividad de distribución de seguros y reaseguros debe llevarse a cabo; y (iii) establecer el régimen de supervisión y medidas administrativas que resulte de aplicación. La nueva legislación marcará las pautas a seguir por los distribuidores de seguros para adaptarse a los nuevos requisitos que se establecen en la DDS en materia de gobernanza de productos, conflictos de interés y normas de transparencia, con especial hincapié en la comercialización de productos de inversión basados en seguros.

La presente Nota tiene por objeto comentar las principales novedades introducidas por el RDL 3/2020 a la hora de transponer la DDS con respecto del régimen anterior de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados (la “LMS”).

1. Objeto y ámbito (objetivo y subjetivo). Clasificación de distribuidores (mediadores de seguros y aseguradoras) y colaboradores externos

Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Distribución

De conformidad con el artículo 129.1 del RDL 3/2020, se entenderá por distribución de seguros *“toda actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro, la celebración de estos contratos, o de asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro. También se entenderán incluidas la aportación de información relativa a uno o varios contratos de seguro de acuerdo con los criterios elegidos por los clientes a través de un sitio web o de otros medios, y la elaboración de una clasificación de productos de seguro, incluidos precios y comparaciones de productos, o un descuento sobre el precio de un contrato de seguro, cuando el cliente pueda celebrar un contrato de seguro directa o indirectamente utilizando un sitio web u otros medios”*. Por su parte, la actividad de distribución de reaseguros se define como *“toda actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de contratos de reaseguro, de celebración de esos contratos, o de asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro. También se incluirá dicha actividad cuando la desarrolle una entidad de reaseguros sin la intervención de un mediador de reaseguros”*.

La definición de distribución de seguros se extiende, por tanto, a la actividad desarrollada

por los comparadores de seguros, que quedarán sujetos al RDL 3/2020 siempre que la actividad que realicen implique la posibilidad para el cliente de celebrar, directa o indirectamente, un contrato de seguro. En la práctica, la mayoría de las webs de comparadores direccionan al cliente a otra página en la que pueden suscribir el contrato de seguro recomendado, por lo que es previsible que la mayoría de los comparadores queden sometidos al RDL 3/2020. Es importante resaltar que los comparadores de seguros no constituyen una categoría independiente de mediadores, sino que deberán adoptar la forma de alguna de las categorías de mediadores (agente de seguros o corredor de seguros, básicamente).

Por otra parte, la principal novedad del RDL 3/2020, respecto de la derogada LMS, es que la nueva ley será de aplicación no solo a los mediadores de seguros y reaseguros, sino también a las entidades aseguradoras y reaseguradoras cuando realicen tareas de distribución directa de seguros (es decir, distribución de productos de seguros a través de sus propios empleados) o actividades directas de reaseguros (es decir, sin la intervención de un mediador de reaseguros). La razón de la extensión del ámbito de aplicación del RDL 3/2020 a las entidades aseguradoras es la necesidad de garantizar la protección de los consumidores de productos de seguro con independencia del canal a través del cual adquieran el seguro.

Otra novedad relevante del RDL 3/2020 es que aclara qué actividades no tendrán la consideración de actividades de distribución de seguros (muchas de las cuales se encontraban hasta la fecha en una zona gris si se tenía en cuenta la definición amplísima de “actividades de mediación”): (i) las actividades de información o asesoramiento prestadas con carácter accesorio en el contexto de otra actividad profesional si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar o ejecutar el contrato de seguro o de reaseguro (por ejemplo, un abogado que asesora a su cliente sobre un producto de seguro); (ii) la gestión de siniestros de una aseguradora o reaseguradora a título profesional, el peritaje y liquidación de siniestros (es decir, las empresas a las que las aseguradoras externalizan la gestión de siniestros no deberán ser mediadores, lo que resuelve una importante controversia



existente hasta el momento); (iii) el mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales a los mediadores de seguros o reaseguros, o a las entidades aseguradoras o reaseguradoras, si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar un contrato de seguro o de reaseguro (es decir, los presentadores de contactos o “avisadores”); (iv) el mero suministro de información sobre productos de seguro o reaseguro, sobre un mediador de seguros o reaseguros, o sobre una entidad aseguradora o reaseguradora a tomadores potenciales, si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar un contrato de seguro o de reaseguro; y (v) la actuación de las entidades aseguradoras como abridoras en las operaciones de coaseguro.

Por último, en cuanto al ámbito de aplicación del RDL 3/2020, se mantiene la actual exclusión de dicho ámbito de la actividad desarrollada por aquellas personas físicas o jurídicas, distintas de una entidad de crédito o de una empresa de inversión, que, a cambio de una remuneración, realicen la actividad de distribución de seguros con carácter complementario a su actividad profesional principal, solo distribuyan determinados productos de seguro que sean complementarios de un bien o servicio y siempre que los productos de seguro en cuestión no ofrezcan cobertura de seguro de vida o de responsabilidad civil, salvo cuando tal cobertura sea complementaria del bien o servicio suministrado por el mediador en su actividad profesional principal. Estas personas físicas o jurídicas, denominadas “mediadores de seguros complementarios”, quedarán exentas de cumplir con el RDL 3/2020 (no se les aplicará dicha Ley) cuando concurren los siguientes requisitos o condiciones: (i) que el seguro sea complementario del bien o servicio suministrado por algún proveedor, cuando dicho seguro cubra el riesgo de avería, pérdida o daño del bien o la no utilización del servicio suministrado por dicho proveedor; o los daños al equipaje o la pérdida de este y demás riesgos relacionados con el viaje contratado con dicho proveedor; y (ii) que el prorrateo anual del importe de la prima abonada por el producto de seguro no supere los 600 euros, o que el importe

de la prima abonada por persona no supere los 200 euros, cuando la duración del servicio a que se refiere el apartado (i) sea inferior o igual a tres meses. Como novedad, cuando la actividad de distribución se realice por un mediador de seguros complementario que esté exento de la aplicación de la Ley, la aseguradora o, en su caso, el mediador, deberán cumplir con una serie de obligaciones de información.

Clasificación de distribuidores de seguros y colaboradores externos

De conformidad con el artículo 134 del RDL 3/2020, tendrán la consideración de distribuidores de seguros (i) las entidades aseguradoras, (ii) los mediadores de seguros, y (iii) los mediadores de seguros complementarios. Las referencias del RDL 3/2020 a los “mediadores de seguros” deben entenderse hechas igualmente a los mediadores de seguros complementarios no excluidos del ámbito de aplicación (es decir, los que no reúnen los requisitos a que hemos hecho referencia en el apartado anterior).

Los mediadores de seguros se clasifican, a su vez, en (i) agentes de seguros; (ii) operadores de banca-seguros (“OBS”) (aunque el artículo 135 del RDL 3/2020 no los incluya en la clasificación, probablemente porque se consideren incluidos dentro de la categoría de agentes de seguros); y (iii) corredores de seguros. Los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios y los corredores de reaseguros deberán inscribirse en el registro administrativo distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (la “DGSFP”) para desarrollar su actividad de distribución de seguros o reaseguros.

Los agentes de seguros se definen (artículo 140 del RDL 3/2020) como las personas físicas o jurídicas que, mediante la celebración de un contrato de agencia con una o varias entidades aseguradoras, se comprometen frente a éstas a realizar la actividad de distribución de seguros en los términos acordados en dicho contrato.

Por su parte, los corredores de seguros se definen (artículo 155 del RDL 3/2020) como las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de distribución de seguros ofreciendo

asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado a quienes demanden la cobertura de riesgos.

Los OBS (artículo 150 del RDL 3/2020) son aquellas entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades mercantiles controladas o participadas por cualquiera de ellos que, mediante la celebración de un contrato de agencia de seguros con una o varias entidades aseguradoras, se comprometan frente a éstas a realizar la actividad de distribución de seguros como agentes de seguros utilizando sus redes de distribución.

Como ya ocurría, los mediadores de seguros pueden recurrir a colaboradores externos para la distribución de los productos de seguros. La nueva regulación de los colaboradores externos (artículo 137 del RDL 3/2020) es muy similar a la derogada LMS, siendo sus principales características las siguientes: (i) solo existe una única figura (el colaborador externo), cuyas funciones –más o menos amplias– se regularán expresamente en el contrato que firme con el mediador de seguros; (ii) los colaboradores externos desarrollarán su actividad bajo la dirección, régimen de responsabilidad (administrativa, civil y profesional) y régimen de capacidad financiera del mediador para el que

actúan; (iii) los colaboradores externos deberán identificarse como tales e indicar también el nombre y datos registrales del mediador para el que trabajan; (iv) los mediadores deberán mantener un registro interno de colaboradores externos, que estará a disposición de la DGSFP; (v) los colaboradores externos deberán reunir los requisitos de honorabilidad comercial y profesional (novedad del RDL 3/2020), además de cumplir con los requisitos de formación que se establezcan en la Ley o normativa de desarrollo; y (vi) se mantiene el régimen de incompatibilidades de los colaboradores externos, que solo podrán colaborar con mediadores de seguros de la misma clase. En el RDL 3/2020 se ha suprimido la previsión del artículo 8.4 de la LMS, que se mantenía en la primera versión del borrador del Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados, según la cual un colaborador externo de un mediador no podía colaborar con otros mediadores de seguros de distinta clase a la de aquél que le contrató en primer lugar. Esta absurda previsión impedía que el colaborador que suscribió su primer contrato mercantil con un agente, pudiese ser colaborador de un corredor en el futuro, lo que a nuestro juicio carecía de todo sentido. La nueva redacción, mucho más acertada, no ata para siempre al colaborador al mediador con el que contrató



en primer lugar, sino que solo impedirá que un colaborador lo sea simultáneamente de un corredor y un agente.

2. Actividad de los distribuidores de seguros

Como se indica en la Exposición de Motivos del RDL 3/2020, con esta norma se pretende transponer a nuestro ordenamiento jurídico la DDS, que es una Directiva con un ámbito de aplicación subjetivo más amplio que el de la Directiva de Mediación (Directiva 2002/92/CE o “DMS”), con el objetivo último de proporcionar a los clientes el mismo nivel de protección, con independencia del canal a través del cual se adquiriera un producto de seguro. Lógicamente, para lograr esa finalidad ya no es suficiente con regular la actividad de mediación, sino que deben regularse todas aquellas vías a través de las cuales los consumidores adquieren productos de seguro.

Por lo tanto, esta Ley pretende regular toda la actividad de distribución de seguros, no únicamente la mediación, considerándose como distribuidores de seguros no solo a los mediadores de seguros, sino también a las propias entidades aseguradoras (que quedaban fuera del ámbito de aplicación de la LMS) y a otros participantes en el mercado que distribuyan seguros con carácter auxiliar, como las agencias de viajes, las empresas de alquiler de automóviles y, como antes apuntábamos, los comparadores de seguros.

Distribución de productos de seguros por las entidades aseguradoras

Por primera vez, se incluye a las compañías de seguros entre los distribuidores de seguros, regulándose la actividad de distribución de seguros y reaseguros realizada por las aseguradoras y estableciendo, en concreto en el artículo 138, que sus empleados podrán promover la contratación de seguros a favor de la entidad de la que dependan.

A estos efectos, se crea (artículo 139.5) un registro interno, sometido al control de la DGSFP, en el que serán inscritos los empleados que

participen directamente en la distribución, así como la persona responsable de la actividad de distribución o las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, que, además, deberán estar inscritas en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros regulado en el artículo 133 del RDL 3/2020. Estos datos deberán transmitirse telemáticamente a la DGSFP, en la forma que determine dicho centro directivo.

Las entidades aseguradoras deberán garantizar que todas estas personas cumplen con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional definidos en el artículo 128 del RDL 3/2020, así como que disponen de los conocimientos y aptitudes apropiados mediante la superación de los cursos de formación de acuerdo con lo previsto en el RDL 3/2020 y en su normativa de desarrollo. En este sentido, las aseguradoras deberán facilitar a todas estas personas los medios necesarios para garantizar una formación continua adaptada a los productos distribuidos, a la función desempeñada y a la actividad realizada, debiendo estar a disposición de la DGSFP la documentación relativa a los programas de formación, que deberán ajustarse a las líneas generales y principios básicos que establezca el supervisor mediante resolución.

Asimismo, en línea con el aumento generalizado de los requisitos de *compliance*, las entidades aseguradoras están obligadas (artículo 139.4) a aprobar, aplicar y revisar periódicamente sus políticas y procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones. Para ello, deberán crear una función que garantice la correcta ejecución de esas políticas y procedimientos internos, debiendo estar el nombre del responsable de esa función (no exclusiva, por lo que podrá compatibilizarse con otras funciones de cumplimiento que esa persona tenga asignadas) a disposición de la DGSFP.

Distribución de productos de seguro por los mediadores de seguros

Disposiciones generales aplicables a todos los mediadores

Como antes apuntábamos, el RDL 3/2020 regula a todos los distribuidores de seguros, distinguiendo entre las entidades aseguradoras, los mediadores de seguros y los mediadores de seguros complementarios. Los mediadores de seguros se clasifican, a su vez, en (i) agentes de seguros; (ii) OBS; y (iii) corredores de seguros, recogiendo en el artículo 136 las disposiciones comunes aplicables a todos los mediadores.

A diferencia del artículo 6 de la LMS, que establecía las obligaciones generales de los mediadores, el legislador ha optado ahora por establecer una serie de prohibiciones para todos los mediadores. Es decir, más que regular las obligaciones de todo mediador con independencia de su categoría, se ha optado por regular lo que no puede hacer ningún mediador.

Así, se establece en primer lugar que no podrán ejercer como mediadores las personas que tengan prohibido el ejercicio del comercio y no podrán ejercer la actividad de distribución de seguros las que se encuentren sujetas por vínculos de dependencia o sujeción especial con el mediador que puedan poner en peligro la libertad de los interesados en la contratación de seguros o en la elección de la aseguradora.

A continuación, se relacionan las actividades que los mediadores no podrán realizar:

- a) Asumir la cobertura de riesgos o tomar a su cargo la siniestralidad objeto del seguro.
- b) Distribuir productos de aseguradoras o reaseguradoras que no cumplan los requisitos para operar en España o se excedan en los límites de la autorización concedida (por ejemplo, cuando una entidad autorizada para operar en España en libre prestación de servicios (“LPS”) en un ramo determinado, comercializa productos de otro).
- c) Utilizar en su denominación social y publicidad expresiones reservadas a las entidades aseguradoras o reaseguradoras.

- d) Añadir recargos a los recibos de prima emitidos por las aseguradoras.
- e) Celebrar o modificar un contrato de seguro en nombre de un cliente sin su consentimiento.
- f) Imponer directa o indirectamente la celebración de un contrato de seguro.

Al igual que se regulaba en el artículo 6.2 de la LMS, los mediadores serán considerados depositarios de las primas pagadas por sus clientes y de las indemnizaciones o reembolsos de primas satisfechas por las aseguradoras. Sin embargo, el artículo 136.4 del RDL 3/2020 establece ahora una novedad relevante con respecto a la derogada LMS consistente en la obligatoriedad de que exista una separación de cuentas entre los fondos de los clientes y el resto de los recursos económicos del mediador (novedad también resaltada en la Exposición de Motivos del RDL 3/2020).

Agentes de seguros

Régimen general

El RDL 3/2020 no introduce novedades especialmente relevantes en la regulación de los agentes de seguros. De una forma más correcta a nuestro juicio, se amplía la regulación de los aspectos comunes a todas las modalidades de agentes en la Subsección 3ª (De la actividad de distribución de seguros realizada por los agentes de seguros y OBS) del Capítulo III, Título I del RDL 3/2020.

Así, se establece (artículo 140) que los agentes son las personas físicas o jurídicas que mediante la celebración de un contrato de agencia con una o varias aseguradoras se comprometen frente a estas a realizar la actividad de distribución de seguros conforme a lo pactado en dicho contrato (artículo 141), que siempre tendrá carácter mercantil, se formalizará por escrito y se regirá por lo que las partes acuerden libremente y, supletoriamente, por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia (“LCA”). Los servicios de los agentes serán retribuidos, debiendo especificarse en el contrato la comisión u otro tipo de remuneración que la aseguradora pagará al agente (ya no se habla de “otros

derechos económicos”, como en el artículo 11.2 de la LMS).

Por otro lado, se sigue estableciendo que los agentes no podrán promover el cambio de aseguradora de la cartera de contratos por ellos distribuidos ni llevar a cabo sin consentimiento de la aseguradora actos de disposición sobre su posición mediadora, añadiéndose ahora que, una vez extinguido el contrato de agencia, la aseguradora deberá comunicarlo a los tomadores de los contratos celebrados con la intervención del agente cesante y, en su caso, informar del inicio de la intervención de un nuevo agente. Se permite, no obstante, que el agente cesante informe a “sus clientes”, esto es, a los tomadores de los contratos celebrados con su intervención, de la extinción de su contrato de agencia.

Tal y como se regulaba en el artículo 13.3 de la LMS, aunque solo respecto de los agentes exclusivos, se prevé en el artículo 142 del RDL 3/2020 que, con independencia de la modalidad de agente de seguros con la que nos encontremos, los importes abonados al mismo por el cliente se entenderán satisfechos a la aseguradora, mientras que los importes abonados por la compañía al agente no se entenderán pagados al cliente hasta que este los reciba efectivamente.

Asimismo, el artículo 143.1 del RDL 3/2020 regula la responsabilidad civil profesional de todos los agentes y de sus colaboradores externos, estableciendo que dicha responsabilidad será imputada a la entidad aseguradora con la que se hubiera celebrado un contrato de agencia cuando derive de su actuación por cuenta de la entidad (el artículo 143.1 no es, sin embargo, aplicable a los OBS). Así, a diferencia de lo que se establecía en los artículos 17 y 23 de la LMS, las entidades aseguradoras responderán, no sólo de la responsabilidad civil profesional de sus agentes exclusivos, sino también de los agentes de seguros vinculados y de los colaboradores externos de unos y otros.

También con carácter general para todas las modalidades de agentes, se establece en el artículo 145 que estos no podrán ejercer como corredores, colaboradores externos de los

corredores o agentes, tercer perito, peritos de seguros o comisarios de averías designados por los tomadores, asegurados o beneficiarios de los contratos de seguro en que hubiesen intervenido como agentes. Por último, el artículo 146 del RDL 3/2020, el cual regula el régimen de comunicaciones y que anteriormente venía regulando el artículo 12 de la LMS, elimina la obligación por parte de una entidad aseguradora de cancelar la deuda que una agencia de seguros con la que pretendiera contratar pudiera ostentar frente a otra entidad aseguradora de la misma clase, por las actividades propias de las agencias de seguros.

Agentes de seguros exclusivos

Los agentes exclusivos deberán ser inscritos en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP por las entidades aseguradoras con las que hayan suscrito el correspondiente contrato de agencia. Para ello, las entidades aseguradoras deberán cumplir una serie de requisitos:

- a) Acreditar que los agentes personas físicas y, en el caso de las personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución y las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, los administradores y todo el personal que participe directamente en la actividad de distribución, cumplen con el requisito de honorabilidad comercial y profesional tal y como es definido en el artículo 128 del RDL 3/2020.
- b) Acreditar que los agentes personas físicas y, en el caso de las personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución y todo el personal que participe directamente en la actividad de distribución, poseen los conocimientos y aptitudes apropiados mediante la superación de los cursos de formación, que deberán modularse en función de los productos que se distribuyan, la función desempeñada y la actividad realizada.

La DGSFP establecerá las líneas generales y los principios básicos de los programas de formación, siendo las aseguradoras las obligadas a facilitar los medios necesarios que garanticen la formación continua de los agentes.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad y formación las aseguradoras deberán aprobar, aplicar y revisar periódicamente sus políticas y procedimientos internos. Además, se establece, con la habitual terminología –muy mejorable, a nuestro juicio– de las normas que prevén obligaciones de cumplimiento normativo (el mal llamado “compliance”) que las aseguradoras determinarán una “función” que garantice la correcta ejecución de esas políticas y procedimientos, debiendo estar a disposición de la DGSFP el nombre de la persona responsable de esa función.

- c) Con carácter previo a presentar la solicitud de inscripción en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP, deberán obtener información sobre los accionistas o socios que tengan una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10% de los derechos de voto o del capital de la agencia; información sobre la identidad de las personas que presenten vínculos estrechos con el agente, e información que permita acreditar que esas participaciones o vínculos estrechos no impidan a la DGSFP el ejercicio de sus funciones de supervisión.

Las aseguradoras deberán conservar y mantener actualizada la documentación acreditativa de estos requisitos, debiendo comunicar a la DGSFP, en la forma que esta determine, los cambios en esa información en el plazo de quince días hábiles desde el acuerdo de modificación.

Además de su inscripción en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP, el artículo 147.2 del RDL 3/2020 establece que las aseguradoras deberán llevar un registro interno actualizado de los agentes exclusivos (en el que se recogerán, al menos, los datos identificativos de estos, las fechas de alta y baja, el carácter exclusivo de los mismos y, en caso de que



sean personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o las personas que integren el órgano de dirección responsable de la actividad de distribución). Este registro interno estará sometido al control de la DGSFP.

Al igual que establecía en el artículo 14.1 de la LMS, el artículo 147.5 del RDL 3/2020 señala que la aseguradora podrá autorizar a su agente exclusivo únicamente la celebración de otro contrato con otra aseguradora para operar en ramos de seguros, riesgos o contratos en los que no opere la aseguradora autorizante. Esta deberá informar por escrito a la aseguradora con la que el agente pretenda celebrar otro contrato de los términos en los que se otorga la autorización y procederá a su anotación en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP.

El artículo 148 del RDL 3/2020 regula los acuerdos de cesión de redes de agentes de seguros exclusivos en los mismos términos en que lo hacía el artículo 4 de la LMS, si bien se precisa (artículo 148.2 del RDL 3/2020) que no

se entenderá que hay cesión de redes entre las aseguradoras que formen parte de un grupo respecto de los contratos de agencia que suscriban cualquiera de ellas en nombre de todas o parte de las entidades del grupo, cuando así se haya acordado. En el contrato de agencia deberán constar las entidades aseguradoras que forman parte del grupo.

Agentes de seguros vinculados

Las novedades introducidas en el régimen jurídico de los agentes de seguros vinculados son escasas.

Como en la derogada LMS, es el propio agente vinculado (y no la aseguradora con la que haya suscrito el correspondiente contrato de agencia) quien debe solicitar su inscripción en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP. Establece el artículo 149.3 del RDL 3/2020 que, para solicitar ante la DGSFP y obtener la inscripción como agente vinculado, se deben cumplir y mantener los siguientes requisitos:

- a) Aportar con la solicitud de inscripción información sobre la identidad de socios y accionistas que tengan una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10% de los derechos de voto o del capital de la agencia; información sobre las personas con vínculos estrechos con el agente e información de que esas participaciones y vínculos no impiden el ejercicio de las funciones de supervisión de la DGSFP.
- b) Acreditar que los agentes personas físicas y, en el caso de las personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución y las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, los administradores y todo el personal que participe directamente en la actividad de distribución, cumplen con el requisito de honorabilidad comercial y profesional tal y como es definido en el artículo 128 del RDL 3/2020.
- c) Acreditar que los agentes personas físicas y, en el caso de las personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución y todo el personal que participe directamente en la actividad de distribución, poseen los conocimientos y aptitudes apropiados mediante la superación de los cursos de formación, que deberán modularse en función de los productos que se distribuyan, la función desempeñada y la actividad realizada.
- d) Presentar una memoria en la que se indiquen los ramos y las aseguradoras para las que distribuyan productos, el ámbito territorial de actuación y los mecanismos de solución de conflictos por quejas y reclamaciones de clientes. Asimismo, esta memoria deberá contener una mención al programa de formación continua al que se hace mención en el apartado e) siguiente.
- e) Presentar un programa de formación continua.
- f) No incurrir en causas de incompatibilidad.

La solicitud de inscripción deberá presentarse en la DGSFP, que deberá pronunciarse de forma expresa al respecto en el plazo de tres meses a partir de la presentación. La inscripción especificará las aseguradoras para las que el agente podrá distribuir seguros.

Cualquier modificación en la información proporcionada deberá comunicarse a la DGSFP en un plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el acuerdo de modificación.

Operadores de banca-seguros

Como se indica en la Exposición de Motivos del RDL 3/2020, los OBS se siguen configurando como agentes de seguros, con ciertas particularidades relativas a cuestiones como la responsabilidad civil profesional e incidiendo en la obligación de formación de sus redes de distribución. Las novedades respecto de la LMS son, no obstante, escasas.

El artículo 150 del RDL 3/2020 establece que se considerarán OBS las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito y las sociedades mercantiles controladas o participadas por cualquiera de ellas (conforme a lo indicado en el artículo 160 del RDL 3/2020), que suscriban contratos de agencia de seguros con una o varias aseguradoras. La principal novedad introducida por el RDL 3/2020 es que desaparece la limitación del artículo 25.1 de la LMS, según la cual una entidad de crédito o un establecimiento financiero de crédito solo podía poner su red de distribución a disposición de un único OBS. Al eliminarse esta restricción, los OBS podrán suscribir contratos de prestación de servicios para utilizar las redes de distintas entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito con objeto de distribuir productos de las aseguradoras de las que sean agentes.

En consonancia con esta modificación, se elimina también la previsión contenida en el tercer párrafo del citado artículo 25.1 de la LMS, según la cual una vez cedida a un OBS la red de distribución de una entidad de crédito o de un establecimiento financiero de crédito, dicha red no podrá fragmentarse para que parte de ella forme parte de la red de otro OBS o colaborador externo

de otro mediador. Con la nueva redacción, no habría ningún obstáculo para fragmentar la red de distribución de una entidad de crédito entre varios OBS, pero la red de distribución no podrá fragmentarse para actuar ni actuar directamente como colaborador externo de otro mediador de distinta clase de conformidad con el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 154.2 del RDL 3/2020 para los OBS.

Parece que con la eliminación de estas restricciones el legislador quiere liberalizar de algún modo la actuación de esta modalidad de mediador, de forma que estos no estén exclusivamente vinculados a las entidades de crédito que controlan al OBS.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 150.1 del RDL 3/2020 remarca que los contratos de prestación de servicios por los cuales se acuerde la cesión de la red de distribución han de ser “recíprocos”, palabra que no se incluía en el artículo 25 de la LMS.

Para la inscripción del OBS en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP deben cumplirse una serie de requisitos:

- a) Ser entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o sociedad mercantil participada o controlada por aquellos o por grupos de entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito, cuyos estatutos sociales prevean la realización de actividades de distribución de seguros como OBS. Estas sociedades deberán estar inscritas en el Registro Mercantil correspondiente con anterioridad a la solicitud de inscripción del OBS.
- b) Presentar una memoria en la que se indiquen los ramos de seguro y las entidades aseguradoras para las que distribuyan seguros, el ámbito territorial de actuación, los mecanismos de solución de conflictos y las redes a través de las que distribuirá seguros.
- c) Acreditar que la persona responsable de la actividad de distribución y las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, los administradores y todas las personas

que participen directamente en la actividad de distribución, cumplen con el requisito de honorabilidad comercial y profesional tal y como es definido en el artículo 128 del RDL 3/2020.

- d) Acreditar que la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución y todo el personal que participe directamente en la actividad de distribución, poseen los conocimientos y aptitudes apropiados mediante la superación de los cursos de formación, que deberán modularse en función de los productos que se distribuyan, la función desempeñada y la actividad realizada.
- e) Presentar un programa de formación continua, según las líneas generales y los principios básicos fijados por la DGSFP.
- f) Garantizar que los fondos de los clientes están separados de los del OBS y que las cantidades abonadas por el cliente son satisfechas al asegurador, mientras que las abonadas por el asegurador deberán ser entregadas efectivamente al cliente.
- g) Acreditar que todas las entidades aseguradoras con las que vaya a celebrar un contrato de agencia asumen la responsabilidad civil profesional derivada de su actuación como OBS o que este dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad en todo el territorio de la UE hasta el importe mínimo que a día de hoy fija el Reglamento Delegado (UE) 2019/1935, cuantía que se revisará y actualizará conforme al índice europeo de precios al consumo por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (“AESPJ”). Esas actualizaciones se harán públicas mediante resolución de la DGSFP.
- h) Aportar información sobre la identidad de socios y accionistas que tengan una participación directa o indirecta igual o superior al 10% de los derechos de voto o del capital del OBS; información sobre las

personas con vínculos estrechos con el OBS e información de que esas participaciones y vínculos no impiden el ejercicio de las funciones de supervisión de la DGSFP.

- i) No incurrir en causas de incompatibilidad.

El artículo 154 del RDL 3/2020 regula con más precisión el régimen de incompatibilidades de los OBS, que no podrán ejercer como corredores o colaboradores externos de estos, tercer perito, perito de seguros o comisario de averías designado por tomadores, asegurados o beneficiarios.

Por último, el artículo 160 del RDL 3/2020 regula de manera conjunta el régimen de vínculos estrechos y participaciones significativas en OBS y corredores de seguros (persona jurídica). Este artículo establece que ambas modalidades de mediadores (en el caso de los corredores, únicamente aquellos que sean persona jurídica) deberán informar a la DGSFP de su intención de establecer relaciones con personas físicas o jurídicas que puedan implicar la existencia de vínculos estrechos (según la definición de este concepto prevista en el artículo 128.12 del RDL 3/2020), así como de la proyectada transmisión de acciones o participaciones que pudiera dar lugar a un régimen de participaciones significativas (según la definición de este concepto prevista en el artículo 128.13 del RDL 3/2020).

La DGSFP dispondrá de tres meses a partir de la presentación de la información para oponerse a la adquisición de la participación significativa o de cada incremento que iguale o supere los límites del 20%, 30% o 50% o cuando de esta forma se vaya a controlar al corredor o al OBS. No obstante, la DGSFP solo podrá oponerse por el hecho de que quien pretenda adquirir esa participación significativa no reúna los requisitos de honorabilidad comercial y profesional o incurra en alguna prohibición prevista en el RDL 3/2020. Si la DGSFP no se pronuncia en ese plazo de tres meses, el silencio deberá considerarse positivo.

Corredores de seguros

Tampoco son relevantes las novedades introducidas en relación con los corredores



seguros. La definición del artículo 155 del RDL 3/2020 pone el acento en la realización de la actividad de distribución de manera independiente, ofreciendo asesoramiento basado en un análisis objetivo y personalizado a quienes demanden la cobertura de riesgos (pero sin mencionar de forma expresa el requisito de no mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras, como se recogía en el artículo 26.1 de la LMS).

A tal fin, los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar el seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a las necesidades de aquel; y deberán velar por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenos efectos (artículo 155.2 del RDL 3/2020). Igualmente, el artículo 155.3 del RDL 3/2020 obliga a los corredores de seguro a facilitar a los tomadores, asegurados y beneficiarios, durante la vigencia del contrato de seguro, la información que reclamen sobre cualquier aspecto o cláusula del contrato y a prestarles asistencia y asesoramiento en caso de siniestro.

No se introducen novedades relevantes en materia de retribución de los corredores, salvo, como veremos, respecto de aquellos corredores que distribuyan productos de inversión basados en seguros (en inglés, “*Insurance Based Investment Products*” o “*IBIP*”) (artículo 180.2 del RDL 3/2020), reproduciéndose prácticamente a estos efectos en el artículo 156 del RDL 3/2020 lo previsto en el artículo 29 de la derogada LMS: la remuneración que perciba el corredor de la aseguradora revestirá la forma de comisiones, pudiendo acordar corredor y cliente que la remuneración de aquel incluya honorarios profesionales que se facturarán directamente al cliente. Ahora bien, en el RDL 3/2020 desaparece la obligación (presente en la derogada LMS), en los casos en que el corredor recibe tanto comisiones de la aseguradora como honorarios del cliente, de que en el recibo de prima se indique el importe de la comisión y el nombre del corredor a quien corresponda.

Por otra parte, en el RDL 3/2020 se ha introducido (en el artículo 156.5) una mención a

la necesidad de contar con el consentimiento del tomador del seguro para modificar la posición mediadora en el contrato de seguro en vigor. En cuanto a los requisitos para ser inscritos en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP (muy similares a los exigidos a los agentes vinculados y a los OBS), los corredores deberán (artículo 157 del RDL 3/2020):

- a) Los corredores de seguros, personas físicas, deberán tener capacidad legal para ejercer el comercio, y en el caso de las personas jurídicas, deberán ser sociedades mercantiles o cooperativas inscritas en el Registro Mercantil y registro de cooperativas correspondiente, previamente a la solicitud de inscripción administrativa, cuyos estatutos prevean, dentro del apartado correspondiente al objeto social, la realización de actividades de distribución de seguros como corredor de seguros. Cuando la sociedad sea por acciones, estas habrán de ser nominativas.
- b) Presentar un programa de actividades indicando los ramos y clase de riesgos que se pretendan mediar, los principios rectores y el ámbito territorial de actuación y la estructura de la organización, los medios personales y materiales de los que vaya a disponer, los mecanismos de solución de conflictos y el plan de ingresos y gastos a tres años.
- c) Acreditar que los corredores personas físicas y, en el caso de las personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución y las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, los administradores y todo el personal que participe directamente en la actividad de distribución, cumplen con el requisito de honorabilidad comercial y profesional, tal y como se define en el artículo 128 del RDL 3/2020.
- d) Acreditar que los corredores de seguros personas físicas y, en el caso de las personas jurídicas, la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de

la actividad de distribución y todo el personal que participe directamente en la actividad de distribución, poseen los conocimientos y aptitudes apropiados mediante la superación de los cursos de formación, que deberán modularse en función de los productos que se distribuyan, la función desempeñada y la actividad realizada.

- e) Presentar un programa de formación continua, según las líneas generales y los principios básicos fijados por la DGSFP mediante resolución.
- f) Disponer de una capacidad financiera, acreditada mediante un aval o un seguro de caución, para proteger a los clientes del riesgo de que los corredores no puedan transferir la prima a la entidad aseguradora o la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado. Esa capacidad financiera deberá alcanzar el 4% del total de primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior al importe que a día de hoy fija el Reglamento Delegado (UE) 2019/1935, salvo que se haya pactado contractualmente con las aseguradoras que, el flujo de dinero entre la compañía y los clientes no pase por las cuentas del corredor o que, en su caso, el corredor de seguros ofrezca al tomador una cobertura inmediata siempre y cuando la entidad aseguradora haya autorizado al corredor a recibir en nombre y por cuenta de ésta las primas satisfechas por los tomadores, entregando el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, y, en uno y otro caso, que las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios.
- g) Contratar un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra al corredor en toda la UE, con la cuantía mínima, por anualidad, que a día de hoy fija el Reglamento Delegado (UE) 2019/1935, cuantía que se revisará y actualizará por la AESPJ conforme al índice europeo de precios de consumo, siendo publicadas esas actualizaciones por resolución de la DGSFP.

h) Aportar y mantener actualizada información sobre la identidad de socios y accionistas que tengan una participación directa o indirecta igual o superior al 10% de los derechos de voto o del capital de la correduría; información sobre las personas con vínculos estrechos con el corredor e información de que esas participaciones y vínculos no impiden el ejercicio de las funciones de supervisión de la DGSFP.

i) No incurrir en causas de incompatibilidad.

El artículo 159 del RDL 3/2020 regula el régimen de incompatibilidades, distinguiendo entre los corredores personas físicas (cuya actividad será incompatible con la de agentes de seguros, colaboradores externos de agentes de seguros u OBS y peritos, comisarios y liquidadores de averías, salvo que solo asesoren a tomadores, asegurados o beneficiarios), y los corredores personas jurídicas (que no podrán simultanear esa actividad con la de aseguradora o reaseguradora, agencia de suscripción, agente de seguros u OBS, colaborador externo de agente u OBS, otras actividades que exijan un objeto social exclusivo y la actuación como peritos y comisarios o liquidadores de averías). Según este régimen de incompatibilidades, sí sería posible, por ejemplo, que un corredor persona física compatibilizase esa actividad con la de un empleado de una aseguradora o reaseguradora.

Finalmente, por lo que se refiere al régimen de vínculos estrechos y participaciones significativas de los corredores de seguros, regulado en el artículo 160 del RDL 3/2020, conjuntamente con los OBS, nos remitimos a lo señalado con anterioridad al hablar de los OBS.

Distribuidores de reaseguro

En cuanto a la distribución de productos de reaseguro, el RDL 3/2020 ya no se limita a regular la figura de los corredores de reaseguro, sino que el artículo 161 también prevé que el reaseguro sea distribuido por los empleados de las empresas reaseguradoras, a las que serán de aplicación las normas recogidas en la Subsección 2ª de la Sección 1ª del Capítulo III, debiéndose entender hechas, a las entidades reaseguradoras,

las referencias que en dicha sección se hacen a las entidades aseguradoras.

Respecto de los corredores de reaseguro, se regula su actividad en los artículos 162-164 del RDL 3/2020, exigiéndoseles para ser inscritos en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP los mismos requisitos que a los corredores de seguros, salvo la exigencia de acreditar su infraestructura y disponer de capacidad financiera.

3. Requisitos de formación y mecanismos de solución de conflictos

Requisitos de formación

De conformidad con el artículo 165 del RDL 3/2020, la DGSFP es la encargada de establecer las líneas generales y los principios básicos (en cuanto a su contenido, organización y ejecución) que tienen que cumplir los cursos de formación y pruebas de aptitud en materias financieras y de seguros privados que deben superar las personas que participan en la distribución de seguros a fin de obtener la correspondiente autorización para llevar a cabo dicha actividad.

En este sentido, la DGSFP, basándose en los conocimientos mínimos a que se refiere el Anexo del RDL 3/2020, emitió el 26 de julio de 2018 el Borrador de Resolución (que sustituirá a la Resolución de 18 de febrero de 2011) que regulará los requisitos de los cursos de formación.

Por otra parte, siguiendo lo establecido en el artículo 165.2 del RDL 3/2020, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó el 26 de julio de 2018 el Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el RDL 3/2020 en materia de formación (que sustituirá al Real Decreto 764/2010, de 11 de junio), que regulará (i) los criterios sobre los conocimientos y aptitudes que deben tener los distribuidores de seguros y reaseguros y su personal relevante; (ii) el modo en que dichos conocimientos y aptitudes deben ser evaluados; y (iii) los requisitos que deben reunir las entidades que quieran organizar los cursos de formación y pruebas de aptitud y que emitirán

las certificaciones que acrediten la superación de los mismos.

Tanto la Resolución de 18 de febrero de 2011 como el Real Decreto 764/2010 seguirán en vigor hasta que el Borrador de Resolución de la DGSFP y el Borrador de Real Decreto sean aprobados. Una vez aprobados y en vigor, introducirán (en caso de que se publiquen con el texto actual) una serie de novedades relevantes en materia de formación. Entre otras novedades cabría destacar (i) que los cursos de formación pasan de denominarse Grupo A, Grupo B y Grupo C a Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3; (ii) que la duración del Nivel 1 (antiguo grupo A) se reduce de 500 a 300 horas de duración y la del Nivel 3 (antiguo Grupo C) se incrementa de 50 a 150 horas de duración, suponiendo, por tanto, un incremento de 100 horas de formación para los colaboradores externos y empleados de distribuidores de seguros y reaseguros que no prestan asesoramiento; (iii) que cambian las personas a las que se exige cada nivel de formación (por ejemplo, si bien a los agentes de seguros vinculados se les exigía formación del Grupo A, ahora únicamente necesitarían acreditar formación del Nivel 2); y (iv) que, tal y como expondremos a continuación, se endurecen los requisitos de formación continua, pues, si bien antes se exigía un plan trienal de formación, ahora se exige un plan anual.

Respecto de la formación continua, de conformidad con el artículo 165 del RDL 3/2020, se convierte en obligatoria para todos los

distribuidores y, además, establece (i) que ésta debe ser “personalizada”, es decir, que los cursos de formación continua deberán considerar la clase de distribuidor, los productos distribuidos, la función desempeñada y la actividad realizada; y (ii) que consista en al menos 15 horas al año.

Finalmente, de conformidad con el artículo 165.3 del RDL 3/2020, la autorización concedida a los centros de formación por cualquier autoridad competente tendrá eficacia nacional. El titular de la autorización comunicará a la autoridad competente de su Comunidad Autónoma o a la DGSFP, según corresponda, la apertura de nuevos centros de formación.

En definitiva, las novedades introducidas en materia de formación buscan, a priori, una equiparación entre los distintos distribuidores, así como una mayor profesionalización. En este sentido, es importante destacar el endurecimiento de las exigencias de formación para los profesionales que no prestan asesoramiento y que solo proporcionan información (ha pasado de 50 a 150 horas de formación), que se equiparan prácticamente con las exigencias de formación de aquellos que sí que prestan asesoramiento (200 horas de formación). Finalmente, la exigencia de una formación continua anual a todos los niveles de formación (y no solo al Grupo B y Grupo C como ocurría antes) pretende dotar a los distintos profesionales de un mayor conocimiento de los productos a distribuir.



Mecanismos de solución de conflictos

Por otro lado, como ya ocurría en la derogada LMS, el artículo 166 del RDL 3/2020 obliga a las aseguradoras, a los corredores de seguros y a los mediadores de seguros domiciliados en otro Estado miembro que operen en España en régimen de derecho de establecimiento –“DE”– o LPS) a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes puedan presentar conforme a lo establecido en el RDL 3/2020 o en la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros.

Por su parte, las aseguradoras deberán atender y resolver las quejas y reclamaciones en relación con la actuación de sus agentes de seguros y OBS (vinculados o exclusivos) y, además, como novedad, las quejas y reclamaciones referidas a la actuación de sus empleados en la distribución de seguros.

A diferencia de lo que ocurría con la derogada LMS, los mediadores domiciliados en otros Estados miembros de la UE que operen en España en régimen de LPS no deben contar con un departamento o servicio de atención al cliente para atender y resolver las quejas y reclamaciones. Si siguen teniendo esta obligación, sin embargo, los mediadores de otros Estados miembros que realicen actividades en España en régimen de DE (a través de sucursal), así como los corredores de seguros, salvo que encomienden la atención y resolución de quejas y reclamaciones a un defensor del cliente. Además, el desempeño de las funciones del departamento o servicio de atención al cliente se podrá externalizar a una persona o entidad, ajena a la estructura de su organización, siempre que reúna los requisitos exigidos en la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros.

Adicionalmente, se añade la posibilidad de que el departamento o servicio de atención al cliente sea común a distintas sociedades de un mismo grupo económico.

Por otro lado, al igual que en la derogada LMS, el artículo 167 del RDL 3/2020 reconoce la posibilidad para las aseguradoras y corredores de seguros de designar un defensor del cliente, a quien corresponderá fundamentalmente

atender y resolver los tipos de quejas y reclamaciones que se sometan a su decisión en el marco de lo que disponga su reglamento de funcionamiento y cuyas decisiones serán vinculantes para la aseguradora o corredor de seguros.

Del mismo modo que en la derogada LMS, el artículo 168 del RDL 3/2020 permite al cliente presentar sus quejas y reclamaciones ante el órgano administrativo competente conforme al procedimiento establecido en la normativa sobre protección del cliente de los servicios financieros (actualmente, el Servicio de Reclamaciones de la DGSFP). Como novedad, el RDL 3/2020 introduce que se podrán presentar quejas y reclamaciones conforme al procedimiento establecido en la normativa en materia de consumo, que sería resuelta por la Oficina de Información al Consumidor correspondiente. Sin perjuicio de lo establecido para las entidades aseguradoras, para poder presentar quejas y reclamaciones, referentes a la actuación de mediadores de seguros residentes en España y de sucursales en España de mediadores de seguros de otros Estados miembros de la UE, ante el órgano administrativo competente, será imprescindible acreditar haber formulado queja o reclamación previamente, por escrito, ante el departamento o servicio de atención al cliente de la entidad o, en su caso, ante el defensor del cliente.

Por último, el RDL 3/2020 prevé también como novedad que las quejas y reclamaciones serán asumidas en el futuro por una institución independiente de protección del cliente financiero que deberá crearse mediante ley, de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.

4. Obligaciones de información y normas de conducta

Obligaciones generales de información

En línea con el deseo de la DDS de reforzar la protección del consumidor, el artículo 172 del RDL 3/2020 recoge los tres principios generales que deben regir la actividad de todos los distribuidores de seguros: (i) los distribuidores deben actuar siempre con honestidad, equidad y profesionalidad en beneficio de los intereses de sus clientes; (ii) la información que proporcionen a sus clientes o posibles clientes debe ser precisa, clara y no engañosa, y las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables como tales; y (iii) los distribuidores no podrán ser remunerados ni podrán evaluar el rendimiento de sus empleados de modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. En particular, un distribuidor de seguros no establecerá ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que, éste o sus empleados, recomienden un determinado producto de seguro a un cliente si el distribuidor de seguros puede ofrecer un producto diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente. Lo cierto es que aunque estos tres principios generales son aplicables a la actividad de todos los distribuidores de seguros, entendemos que encajan más con la actividad de los corredores (que efectivamente deben ofrecer un producto que se ajuste a las necesidades del cliente) que a la de los agentes u OBS.

Respecto de la información que tienen que proporcionar los mediadores de seguros, el RDL 3/2020 regula en su artículo 173 la información que éstos tienen que proporcionar al potencial tomador de un contrato de seguro con carácter previo a su celebración.

Este precepto enumera la información que debe proporcionar el mediador de seguros, en términos similares al derogado artículo 42 de la LMS (identidad del mediador, registro en el que está inscrito, naturaleza del mediador, si ofrece asesoramiento en relación con los productos comercializados, tratamiento de datos de carácter personal, procedimientos de reclamación, datos sobre su participación directa

o indirecta en una aseguradora y naturaleza de la remuneración que recibe, etc.). Si, a lo largo de la duración del contrato de seguro, esta información cambiase, deberá informarse de tal modificación al tomador.

Por otro lado, el RDL 3/2020 regula separadamente –en su artículo 174– la información que tienen que proporcionar las entidades aseguradoras a los potenciales tomadores con carácter previo a la celebración de un contrato de seguro (aunque la redacción no es clara, entendemos que este artículo solo es de aplicación cuando la aseguradora distribuye el producto de seguro directamente).

Por su parte, el artículo 175 del RDL 3/2020 exige a todos los distribuidores de seguros (mediadores y aseguradoras), basándose en información obtenida del cliente y en las exigencias y necesidades de este último, proporcionar información objetiva acerca del producto de seguro de forma comprensible, de modo que el cliente pueda tomar una decisión con conocimiento de causa, todo ello en función de la complejidad del producto y del tipo de cliente. Además, se establece que si se facilita asesoramiento antes de la celebración de un contrato de seguro, el distribuidor de seguros facilitará al cliente una recomendación personalizada en la que se explique por qué un producto concreto satisfará mejor las exigencias y necesidades del cliente. Esta obligación se extiende, pues, no solo a los corredores (conforme a su obligación de realizar un análisis objetivo y personalizado, al que también se refiere este precepto), sino también al resto de distribuidores, por lo que con el nuevo RDL 3/2020 los agentes, OBS y las aseguradoras que presten asesoramiento antes de la contratación del seguro deberán explicar también a los tomadores por qué un producto se ajusta más a sus necesidades.

El artículo 176 del RDL 3/2020 se refiere a la forma en que deberá facilitarse la información regulada en el artículo 175 cuando se distribuyan productos de seguro distintos del seguro de vida (en un documento breve e independiente, con una presentación y estructura claras, en lengua oficial, etc.). Este documento se denomina en la norma “*documento de información previa*” (en inglés “*insurance product information document*” y, por sus siglas, “IPIID”). En este sentido, este precepto hace referencia expresa a la aplicación del Reglamento de ejecución (UE) 2017/1469

de la Comisión, de 11 de agosto de 2017, por el que se establece un formato de presentación normalizado para el documento de información sobre productos de seguro. Además, para este tipo de seguros (distintos del de vida) a los que resulte de aplicación lo dispuesto en este artículo, el RDL 3/2020 precisa que no será necesario suministrar la información establecida en los artículos 122, 125 y 126 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (“ROSSEAR”) por entender que esta información ya se recoge en el documento que se entregue a los tomadores en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176 del RDL 3/2020. El RDL 3/2020 no contiene ningún precepto similar en relación con la distribución de seguros de vida riesgo (solo para la distribución de productos de inversión basados en seguros, como veremos), lo que, a nuestro juicio, carece de sentido (la información que se proporciona al potencial tomador de un seguro de vida riesgo también debería reforzarse, atendiendo a los objetivos perseguidos por la DDS).

En definitiva, antes de la celebración de un contrato de seguro, el potencial tomador debería recibir dos “notas informativas”: una incluyendo información sobre el mediador de seguros o sobre la aseguradora (si es la aseguradora quien distribuye el seguro directamente) y otra (denominada “*documento de información previa sobre el producto de seguro*”, según la redacción dada en el RDL 3/2020) que incluya la información correspondiente sobre el producto de seguro. El artículo 182 del RDL 3/2020 regula la forma en que deberán proporcionarse estas notas informativas (en papel, de forma clara y precisa, en una lengua oficial del Estado miembro en el que se sitúe el riesgo o bien en cualquier lengua acordada por las partes y de forma gratuita).

De conformidad con el RDL 3/2020 (artículo 177), estas notas informativas no deben proporcionarse, sin embargo, cuando el producto de seguro distribuido sea de grandes riesgos (definidos en el artículo 128 del RDL 3/2020 como aquellos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 20/2015, de 14 de julio,

de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras o “LOSSEAR”).

Obligaciones adicionales en relación con la distribución de productos de inversión basados en seguros

El RDL 3/2020, siguiendo la línea de la DDS, refuerza los requisitos de información cuando lo que se distribuya sea un producto de inversión basado en seguros, todo ello debido a la especial complejidad y la innovación constante en el diseño de estos productos. Tal y como se establece en el Considerando 33 de la DDS, la adquisición de un producto de inversión basado en seguros conlleva un riesgo y los inversores deben poder confiar en la información y en la calidad de las evaluaciones que se les facilitan.

Los artículos 178 a 181 del RDL 3/2020 regulan, como decimos, los requisitos adicionales que deben cumplir los mediadores y aseguradoras que distribuyan productos de inversión basados en seguros:

1. Prevención de conflictos de intereses (artículo 179 del RDL 3/2020)

De acuerdo con el artículo 179 del RDL 3/2020, los mediadores de seguros y las entidades aseguradoras que distribuyan productos de inversión basados en seguros deberán adoptar todas las medidas oportunas para detectar los posibles conflictos de intereses que surjan entre ellos mismos, incluidos sus órganos de dirección y empleados o cualquier persona directa o indirectamente ligada a ellos por vínculos de control, y sus clientes, o entre un cliente y otro, en el ejercicio de actividades de distribución de seguros. Además, deberán adoptar medidas organizativas eficaces destinadas a impedir que las situaciones de conflictos de interés detectadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior perjudiquen los intereses de sus clientes. Si las medidas no fueran suficientes para garantizar que se eviten riesgos de perjuicio de los intereses de los clientes, el distribuidor deberá informar de ello al cliente con tiempo suficiente antes de celebrar el contrato de seguro. Esta información deberá proporcionarse (i) en un soporte duradero y (ii) de manera

detallada, teniendo en cuenta la naturaleza del cliente, para permitirle tomar una decisión fundada con respecto a las actividades de distribución de seguros en cuyo contexto surja el conflicto de intereses.

2. Información previa a facilitar a los clientes (artículo 180 del RDL 3/2020)

Además de la información general enumerada en los artículos 173 y 174 del RDL 3/2020, los distribuidores de productos de inversión basados en seguros deberán proporcionar al potencial tomador, “con el tiempo suficiente antes de celebrarse el contrato de seguro” (antes se hablaba solo de “antes de celebrar”) como mínimo, la siguiente información adicional: (i) cuando se ofrezca asesoramiento, se deberá indicar si se entregarán al cliente evaluaciones periódicas de la idoneidad del producto recomendado a dicho cliente; (ii) orientaciones y advertencias sobre los riesgos conexos a los productos o a determinadas estrategias de inversión; e (iii) información sobre todos los costes y gastos asociados, incluido el coste del asesoramiento, entre otros. En este sentido, el RDL 3/2020 precisa que la información sobre los costes y gastos asociados al contrato de seguro se proporcionará de manera agregada, de forma que los tomadores puedan comprender el coste total así como el efecto acumulativo sobre el rendimiento de la inversión, debiendo, además, facilitarse un desglose de los costes y gastos por conceptos si el cliente lo solicitara. Esta información deberá facilitarse de forma periódica (al menos, una vez al año) y se hace especial hincapié en que la misma se proporcione de forma comprensible, a fin de que el potencial tomador pueda comprender y valorar adecuadamente los riesgos antes de contratar el seguro.

Como novedad a destacar, el apartado 2 del artículo 180 del RDL 3/2020 establece que cuando se informe al tomador de que el asesoramiento en los productos de inversión basados en seguros en los que éste asuma el riesgo de la inversión, se ofrece de forma independiente basado en un análisis objetivo y personalizado, los mediadores (es decir, los corredores por ser éstos los únicos mediadores

que encajarían en esta descripción) no podrán aceptar ni retener ninguna remuneración (ya sean honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios) de terceros en relación con la distribución de este tipo de productos (entendiendo por terceros a cualquier persona distinta del tomador, incluyendo, por tanto, a las aseguradoras). En definitiva, el RDL 3/2020 prohíbe que los corredores de seguros perciban cualquier remuneración de terceros distintos de los tomadores (incluyendo así a las aseguradoras), modificación de calado que no se ha justificado lo suficiente, más allá de inspirarse en la Directiva MiFID 2 y que supondrá graves problemas para aquellos corredores que distribuyan este tipo de productos –cuya remuneración perciben directamente de las aseguradoras– que se verán obligados en algunos casos a transformarse en agentes de seguros para poder continuar percibiendo remuneración por la distribución de este tipo de productos. Esta cuestión ya se introducía en el Borrador de Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros de 21 de mayo de 2018 pero no en el Borrador de Anteproyecto. La justificación podemos encontrarla al final del apartado donde se señala de manera indirecta que la misma obedecería a la voluntad de evitar que cualquier tipo de remuneración pueda afectar al cumplimiento por el mediador de seguros (corredor) de actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad y en el mejor interés de sus clientes.

Las anteriores obligaciones de información recogidas en el RDL 3/2020 en relación con los productos de inversión basados en seguros deben conjugarse con el cumplimiento del Reglamento 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 sobre los documentos de datos fundamentales (“Key Information Document” o “KID” según sus siglas en inglés) relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros.

3. Análisis de idoneidad y adecuación e información a los clientes (artículo 181 del RDL 3/2020)

De conformidad con el artículo 181 del RDL 3/2020, cuando el mediador o aseguradora realicen actividades de distribución en las que ofrezcan asesoramiento sobre un producto de inversión basado en seguros, deberán recabar del potencial cliente, en todo caso, además de información general, información sobre sus necesidades y exigencias a que se refiere el artículo 175 del RDL 3/2020 y que se refiere a los siguientes extremos: (i) conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión propio de la clase de producto; (ii) situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas; y (iii) objetivos de la inversión, incluida su tolerancia al riesgo, todo ello a fin de que el distribuidor pueda recomendar el producto de inversión basado en seguros idóneo para el cliente y que, en particular, mejor se ajuste a su tolerancia al riesgo y capacidad de soportar pérdidas. Si el distribuidor no lleva a cabo actividades de asesoramiento (por ejemplo, un agente de seguros que ofrece el producto sin asesorar al cliente), deberá obtener en todo caso información sobre los conocimientos y experiencia del cliente en el ámbito de inversión propio de la clase de producto que está ofreciendo (además de la información general sobre las necesidades y exigencias del cliente), salvo en el caso de que se cumplan todos los requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 181 del RDL 3/2020 (esto es, (i) que la actividad de distribución se refiera a productos de inversión basados en seguros (a) que solo ofrezcan una exposición de inversión a instrumentos financieros no complejos y que no incorporen una estructura que dificulte al cliente la comprensión del riesgo implicado o (b) que se trate de otras inversiones no complejas, (ii) que la actividad de distribución se lleve a cabo a iniciativa del cliente o cliente potencial y (iii) que el cliente haya sido claramente informado de que para la prestación de la actividad de distribución de seguros no es necesario que el mediador de seguros o la entidad aseguradora evalúen la idoneidad del producto y de que el cliente no goza de la correspondiente protección

de las normas de conducta pertinentes y (iv) que el mediador de seguros o aseguradora cumpla con sus obligaciones en materia de gestión y prevención de conflictos de interés). Si, una vez obtenida la información indicada, el distribuidor considerase que el producto no es adecuado para el cliente, deberá advertírsele al cliente. Además, si el cliente o cliente potencial no facilitase la información requerida o facilitasen información insuficiente sobre su conocimiento y experiencia, el distribuidor deberá advertirle de que no está en condiciones de decidir si el producto previsto es adecuado para él.

En definitiva, a diferencia de lo que exigía la derogada LMS, el RDL 3/2020 exige a los distribuidores de productos de inversión basados en seguros realizar un exhaustivo análisis de la idoneidad y adecuación de un producto a sus clientes. Con ello pretende evitarse, por ejemplo, que una persona sin conocimientos en productos de inversión o con una mala situación financiera contrate un complejo seguro unit-linked con un elevado riesgo.

5. Ventas combinadas y vinculadas

En el artículo 184 del RDL 3/2020 se regulan por primera vez las ventas combinadas y vinculadas, esto es, la venta, bajo un mismo contrato, de un seguro conjuntamente con otros servicios o productos auxiliares distintos (*“Cuando un contrato de seguro sea el producto principal que se ofrezca conjuntamente con servicios o productos auxiliares distintos de los seguros como parte del mismo paquete o acuerdo...”*).

El concepto de ventas vinculadas y combinadas no se definía en el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros. Sin embargo, el RDL 3/2020 sí ha incluido ahora en su artículo 128 la definición de estos términos, matizando que la venta vinculada alude a los casos en los que el contrato de seguro no se oferta al cliente por separado, mientras que la venta combinada se refiere a los casos en los que el contrato de seguro se ofrece al cliente también por separado.

Para la venta de estos paquetes o acuerdos, el RDL 3/2020 exige que, además de especificarse las exigencias y necesidades del cliente (como en el resto de ventas informadas), se le informe de si los distintos componentes pueden adquirirse de forma separada, ofreciendo en tal caso, una descripción de los diferentes componentes del acuerdo y un justificante de los costes y gastos de cada componente por separado.

En estas circunstancias, y si el riesgo o la cobertura resultantes de dicho paquete o acuerdo fuesen diferentes teniendo en cuenta cada componente por separado, el RDL 3/2020 exige al distribuidor que facilite además de la descripción de cada componente, una descripción del modo en que la interacción entre ellos modifica el riesgo o la cobertura del seguro.

Asimismo, el apartado segundo del artículo 184 del RDL 3/2020 establece que el distribuidor de seguros debe ofrecer al cliente la posibilidad de adquirir el bien o servicio por separado. Apartado que no es de aplicación si el producto de seguro es complementario de un servicio o actividad de inversión, un contrato de préstamo o cuenta de pago.

Para la venta de estos paquetes o acuerdos, el RDL 3/2020 impone a los distribuidores asimismo ciertas obligaciones de información previas a su contratación. Así, el distribuidor deberá informar al usuario de manera expresa y comprensible (i) de que se está realizando una práctica de venta combinada o vinculada; (ii) de la parte del coste total que corresponde a cada uno de los productos o servicios; (iii) de los efectos que la contratación o la cancelación anticipada del seguro o de los productos vinculados produciría sobre el coste conjunto; y (iv) de las diferencias existentes entre la oferta conjunta y por separado de los mismos.

Por su parte, se faculta a la DGSFP para que, cuando tenga constancia de la realización de prácticas que perjudiquen a los usuarios, pueda establecer medidas, incluida la prohibición, en relación con la venta de estos productos combinados y vinculados.

Por último, hay que tener en cuenta que precepto no será de aplicación a la distribución de seguros multirriesgo, es decir, un seguro que cubre múltiples riesgos a la vez no se considera un paquete o acuerdo a los efectos de la venta combinada y vinculada.

6. Control de productos y requisitos en materia de gobernanza

En línea con el artículo 25 de la DDS, el artículo 185 del RDL 3/2020 impone a las entidades aseguradoras y mediadores que diseñen productos de seguro la obligación de diseñar, establecer, gestionar y revisar un procedimiento de aprobación de tales productos antes de su lanzamiento, así como un procedimiento de seguimiento durante la comercialización de los mismos. Este procedimiento debe ser proporcionado y adecuado a la naturaleza del producto.

El procedimiento deberá especificar el mercado destinatario del producto y deberá garantizar la evaluación de los riesgos del mismo. La estrategia de distribución y el mercado destinatario del producto deberán ser coherentes y deberán adoptarse las medidas razonables que sean necesarias para garantizar que el producto de seguro se distribuye en el mercado destinatario definido.

Como decíamos, el control no se limitará únicamente a la fase previa al lanzamiento del producto, sino que se extenderá durante la comercialización del mismo a través de revisiones periódicas del producto, a fin de asegurar que el producto sigue respondiendo a las necesidades del mercado destinatario y de comprobar si la estrategia de distribución sigue siendo la adecuada.

Cuando sea la aseguradora quien diseñe el producto de seguro, deberá poner a disposición de los distribuidores toda la información sobre los productos y su proceso de aprobación (de manera que los distribuidores puedan conocer y comprender tanto las características de cada producto como el mercado destinatario definido).

Los seguros de grandes riesgos no se verán afectados, sin embargo, por las obligaciones establecidas en el citado artículo 185 del RDL 3/2020.

7. Competencias de ordenación y supervisión

Competencias de la Administración General del Estado

La Subsección 1ª de la Sección 7ª del Capítulo III del Libro Segundo no sigue el esquema de la LMS, dado que lo relativo a las competencias autonómicas se ha desplazado, según veíamos, al Capítulo III del Título I del Libro Segundo del RDL 3/2020. Así, en su artículo 186, se recoge que, salvo lo establecido para las competencias atribuidas expresamente a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la DGSFP, tendrá la competencia para ejercer el control regulado en el Título I. Concretamente, la DGSFP podrá requerir “la documentación e información” que sea necesaria para un adecuado seguimiento y control del mercado, según se determine reglamentariamente o por requerimientos individualizados. Corresponde así, prácticamente al completo, ese artículo 186 al artículo 48 LMS, con el añadido de su punto 5 (“La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará a la Comisión de las dificultades de carácter general que hallen sus distribuidores de seguros o de reaseguros para establecerse o ejercer actividades de distribución de seguros o reaseguros en un tercer país”), cuyo origen se remonta a la DMS (artículo 1, in fine).

Continúan las correspondencias con la LMS en el artículo 187 (obligaciones contables y deber de información estadístico-contable), que, a grandes rasgos, traslada el contenido del artículo 49 de la derogada LMS haciendo referencia asimismo a las obligaciones mercantiles o fiscales adicionales en esta materia a las que pudieran estar sujetos los corredores de seguros y reaseguros. Asimismo, el artículo 188 (deber de secreto profesional) traslada fielmente el contenido del artículo 50 LMS salvo una

corrección de estilo al descomponer en tres puntos lo que eran dos.

El artículo 189 (deber de colaboración con otras autoridades supervisoras) se desarrolla, sin embargo, más que su referente en la LMS, el 51, precisamente porque en este punto la DDS es igualmente más extensa (cfr. su artículo 13). Así, se contempla la colaboración entre supervisores, muy en particular para que fluya la información sobre la honorabilidad y aptitud de los mediadores y, en su caso, las posibles sanciones u otras medidas administrativas que les sean impuestas. Además, se prevé el deber de proporcionar información a la AESPJ sobre mediadores que han notificado intención de realizar actividades transfronterizas. Finalmente, se completa la norma con una previsión de intercambio de información interna, esta vez entre DGSFP, Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”), organismos estos últimos a los que el Centro Director informará “cuando en el ejercicio de sus competencias tenga conocimiento de posibles irregularidades en la comercialización de productos o servicios financieros que sean objeto de práctica de venta combinada o vinculada junto con productos de seguros, con el fin de coordinar las actuaciones de supervisión con dichas autoridades”.

El artículo 190 (cancelación de la inscripción del Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros) traslada nuevamente de forma en su mayoría literal el contenido de un viejo artículo de la LMS, el 53. Las notas que diferencia a uno y a otro son menores – desaparición de referencias a auxiliares-asesores, por ejemplo– o de matiz en cuanto a las magnitudes a tener en cuenta para la inactividad que se traduce en una falta de iniciación o cese de ejercicio que puede acarrear pérdida de la autorización en el caso de corredores (elevación de la cifra de negocio del corredor de seguros desde 30.000 a 100.000 euros -500.000 en el caso del corredor de reaseguros-, todo ello por referencia a primas distribuidas), corrección técnica que por cierto es de agradecer para no poner en aprietos a tantos profesionales que luchan por sacar adelante pequeñas carteras muy castigadas por la Gran Crisis Financiera.

Responsabilidad frente a la Administración y régimen de infracciones y sanciones

Las correcciones que inaugura el artículo 191 (sujetos infractores) son en su mayoría técnicas, mejorando la redacción que tenía el artículo 54.1 de la LMS. Los dos cambios fundamentales –el primero por lo demás implícito en el texto del artículo 8 de la LMS– es decretar la responsabilidad frente a la administración de los mediadores por la actuación de sus colaboradores externos, y aludir a la responsabilidad de “las personas responsables de la actividad de distribución”, mención que alcanza a un universo indeterminado de posibles responsables dentro de las entidades aseguradoras, por lo que estamos aquí ante un punto donde debe llamarse a la cautela interpretativa.

En el artículo 192 se detalla el catálogo de infracciones, en correlación por tanto con el artículo 55 LMS, manteniéndose la tipología clásica en Derecho sancionador español de muy graves, graves y leves. Si repasamos cada uno de estos bloques, detectamos que:

- Las infracciones muy graves se mantienen casi sin excepción. Son notables:
 - (a) la inclusión de un plazo concreto en la infracción recogida en el apartado (h) a partir de la cual se considera una infracción muy grave el reiterado incumplimiento de las resoluciones emanadas por la DGSFP, considerándose reiterado “cuando se incumpla una resolución y no se atienda en el plazo previsto en el propio requerimiento o en su defecto en el plazo de 1 mes al requerimiento que al efecto se formule por la DGSFP”.
 - (b) los cambios recogidos en las letras k) y l), que desdoblaron la letra k) de la LMS; concretamente la letra k) hace referencia específicamente al Reglamento (UE) no 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros, y, por su

parte, la letra l) a los incumplimientos de información respecto de productos de seguro distintos de los contemplados en la letra k);

- (c) el que los corredores, cuya infracción muy grave en la LMS -letra l)-, se condensaba en “la pérdida de independencia”, ahora ven su referencia integrada en la misma letra l), pero referida al “incumplimiento reiterado de la obligación de realizar un asesoramiento basado en un análisis objetivo y personal”;
 - (d) la desaparición de la referencia a las delegaciones a los auxiliares externos -letra u) de la LMS-;
 - (e) la desaparición de la referencia “salvo que tales actos tengan un carácter de meramente ocasional o aislado” de la letra o) de la LMS relativa a las prácticas abusivas;
 - (f) la aparición de “la inscripción en el registro previsto en el artículo 133 de esta ley en virtud de declaraciones falsas o por cualquier otro medio irregular”; y
 - (g) la inclusión de la infracción relativa a la falta de comunicación “por parte del mediador de seguros, al cliente o al tercero perjudicado, de la identidad de las entidades aseguradoras que asumen su responsabilidad civil profesional o, en su caso, de la identidad de la entidad aseguradora con la que se concierte el seguro de responsabilidad civil profesional o de la entidad que otorga garantía equivalente, así como de aquel que sea el garante de su capacidad financiera”.
- Las infracciones graves siguen la misma estela de continuismo, con algún matiz: correspondiendo a lo señalado anteriormente:
- (a) se elimina la referencia a la realización “meramente ocasional o aislada” del antiguo artículo 55.3 a) de la LMS, en las nuevas letras a) y d) del artículo 192.3;
 - (b) si la letra d) del artículo 55.2 de la LMS aludía a la “pérdida de la independencia” de los corredores, la letra d) del RDL 3/2020 apunta al incumplimiento “de la obligación

de realizar un asesoramiento basado en un análisis objetivo y personal"; y

(c) la "veracidad informativa" que había de presidir la actuación del mediador en la LMS se traduce en el RDL 3/2020 en el cumplimiento de las "obligaciones de información y normas de conducta".

- Se modifica en la misma línea la regulación de las infracciones muy leves, pasando a constituir en "incumplimientos de normas reglamentarias [...] o de los requisitos establecidos en ellas", eliminando de esta manera la referencia a aquellos incumplimientos "ocasionales o aislados".

El antiguo 58 de la LMS (prescripción de infracciones y sanciones) se divide en dos artículos, el 193 y el 197 (relativos a

prescripción de infracciones y de sanciones, respectivamente), siendo su contenido prácticamente idéntico al 58 de la LMS, con un matiz: la prescripción de infracciones y sanciones graves pasa a ser de cuatro en vez de tres años.

El artículo 194 del RDL 3/2020 es quizás el que más atrajo la atención de los observadores en los primeros compases de la andadura de la norma (cfr. <http://www.expansion.com/empresas/2017/01/23/5885fca946163f1a098b45d9.html>), por lo que se ha calificado como un aumento de multas¹ "salto en los castigos", inspirado en lo ocurrido en el mundo bancario:

¹ El artículo 194 del RDL 3/2020 prevé que, en caso de infracciones muy graves y graves, podrá imponerse la sanción de publicidad de la infracción de forma adicional a alguna de las otras sanciones.

Tipo de infracción	Sanción en el RDL 3/2020		Sanción en la LMS
Muy grave	<p>Personas jurídicas: Se impondrán en todo caso alguna de las siguientes sanciones:</p> <p>1. En general: A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) 1.000.000 € o 3% volumen de negocios anual (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, si son determinables. B. En caso de mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios o de corredores de seguros, cancelación de su inscripción o suspensión por un plazo máximo de 10 años para el ejercicio de la actividad.</p>	<p>Personas físicas: Se impondrán en todo caso alguna de las siguientes sanciones:</p> <p>1. En general: A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) 100.000 € (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, si son determinables B. En caso de mediadores de seguros, mediadores de seguros complementarios o de corredores de seguros, cancelación de su inscripción o suspensión por un plazo máximo de 10 años para el ejercicio de la actividad.</p>	15.001 a 30.000 € (común a personas físicas y jurídicas)

Tipo de infracción	Sanción en el RDL 3/2020		Sanción en la LMS
	<p>C. Publicidad de la infracción, indicando la identidad del infractor y la sanción impuesta</p> <p>2. En especial (incumplimientos obligaciones de información y normas de conducta en productos de inversión basados en seguros):</p> <p>A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) 5.000.000 € o 5% volumen de negocios anual. (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, si son determinables.</p> <p>B. Prohibir o suspender la comercialización del producto de inversión basado en seguros.</p> <p>C. Prohibir facilitar el documento de datos fundamentales y exigir una nueva versión del documento.</p>	<p>C. Publicidad de la infracción, indicando la identidad del infractor y la sanción impuesta.</p> <p>2. En especial (incumplimientos obligaciones de información y normas de conducta en productos de inversión basados en seguros):</p> <p>A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) 700.000 € (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, si son determinables.</p> <p>B. Prohibir o suspender la comercialización del producto de inversión basado en seguros.</p> <p>C. Prohibir facilitar el documento de datos fundamentales y exigir una nueva versión del documento</p>	
Grave	<p>Personas jurídicas: Se impondrá alguna de las siguientes sanciones: A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) 500.000 € o 1% volumen de negocios anual (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción si son determinables. B. En el caso de mediadores de seguro so reaseguros, suspensión por un plazo máximo de un año para el ejercicio de la actividad.</p> <p>C. Publicidad de la infracción y de la sanción.</p>	<p>Personas físicas: Se impondrá alguna de las siguientes sanciones: A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) 50.000 € (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, si son determinables. B. En el caso de mediadores de seguro so reaseguros, suspensión por un plazo máximo de un año para el ejercicio de la actividad.</p>	6.001 a 15.000 € (común a personas físicas y jurídicas)

Tipo de infracción	Sanción en el RDL 3/2020		Sanción en la LMS
Leve	<p>Personas jurídicas: Se impondrá alguna de las siguientes sanciones:</p> <p>A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) Mayor de 100.000 € o 1% volumen de negocios anual (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, si son determinables.</p> <p>B. Amonestación privada.</p>	<p>C. Publicidad de la infracción y de la sanción.</p> <p>Personas físicas: Se impondrá alguna de las siguientes sanciones:</p> <p>A. Multa por el mayor de los siguientes importes: (i) 10.000 € (ii) el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, si son determinables.</p> <p>B. Amonestación privada.</p>	Hasta 6.000 € (común a personas físicas y jurídicas)

Se puede observar así, de una parte, la introducción de un parámetro muy común en el moderno Derecho Administrativo sancionador, tal cual es el “*volumen de negocios anual total*”, sobre el que se fijan reglas para permitir su determinación en la distinta casuística que puede presentarse (casos de empresas que dependen de matrices con las que elaboren estados financieros consolidados, etc.).

En cuanto al catálogo de sanciones posibles en infracciones graves, se elimina la sanción de “*amonestación pública*”. En cuanto a las sanciones posibles en infracciones leves, no hay novedades, manteniéndose la añeja “*amonestación privada*” dentro de las sanciones posibles a las infracciones leves, cuyo significado práctico es o simpático o ineficiente para el fin pretendido.

El artículo 195 del RDL 3/2020 (responsabilidad de quienes ejercen cargos de administración o de la persona responsable de la actividad de distribución o de quienes formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de distribución en las entidades aseguradoras y reaseguradoras, sociedades de agencia de seguros, OBS, sociedades de correduría de seguros y sociedades de correduría de reaseguros) sigue la sistemática del artículo 57 de la derogada LMS, extendiendo esta responsabilidad tanto a administradores de hecho como de derecho. Sin perjuicio de esta modificación, el artículo no sufre grandes modificaciones más allá de una elevación de las multas pecuniarias, en coherencia con lo visto anteriormente. Así, de multas de 30.001 a 60.000 euros, se pasa a multas de 200.000 (en infracciones muy graves), y a multas de 30.000 euros a hasta 100.000 euros (en infracciones graves). Asimismo se añade un límite mínimo a la sanción de separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier sociedad de mediación de seguros o de correduría de reaseguros, que anteriormente era por un plazo máximo de 10 años y, a partir de ahora, por un plazo mínimo no inferior a cinco años.

Los criterios de graduación de sanciones se contienen en el artículo 196 del RDL 3/2020,

en un avance respecto a la derogada LMS, que no contenía nada parecido. Así, se contienen agravantes y atenuantes a tener en cuenta: gravedad y duración de la infracción, grado de responsabilidad, solidez financiera, importancia de beneficios obtenidos o pérdidas evitadas, pérdidas para clientes o terceros, nivel de cooperación, medidas adoptadas para evitar que la infracción se repita e historial anterior de infracciones cometidas.

Algunas de ellas requieren una lectura y comentario, por su novedad en nuestro sistema:

- “*La solidez financiera de la persona física o jurídica responsable, reflejada, bien en los ingresos anuales de la persona física responsable, o bien en el volumen de negocios total de la persona jurídica responsable*”. Es una manifestación de lo que los anglosajones llaman el “*deep pocket*”, como criterio de atribución de responsabilidad. La sanción será más o menos cuantiosa en función no ya de la actuación contraria a Derecho, sino de la capacidad que tiene el administrado para pagar la multa, principio este que -nos parece- ha de ser acogido con muchos matices y reservas en nuestro sistema.
- “*La importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse*”. Una manifestación en Derecho español de una suerte de daños punitivos: la sanción será más grande (o menos) en función del beneficio o pérdida obtenido por el sujeto infractor. Como el anterior, si bien comparte su naturaleza de aportación novedosa bajo el principio del Derecho Administrativo sancionador moderno, ha de ser acogido este criterio de graduación con muchísimos matices y aún con crítica.
- “*El nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la autoridad competente*”. Es otro criterio de graduación que da lugar a especulación: ¿la delación de otros infractores puede llegar a una solución acordada que deje incólume al infractor-denunciante? Como mínimo, es una posibilidad sugerente.



En el artículo 198 (competencias administrativas) el sistema del artículo 59 de la LMS se ha reformulado para señalar que habrá un instructor funcionario de la DGSFP a cargo del procedimiento administrativo sancionador, bajo la responsabilidad del Director General de la DGSFP, manteniéndose el reparto de imposición de sanciones de la LMS (graves y leves, DGSFP, muy graves, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a propuesta de la DGSFP).

Respecto de la remisión al régimen sancionador de las entidades aseguradoras (y reaseguradoras, debería decir el título del artículo), en el artículo 199 (antiguo artículo 60 de la LMS), se modifica la regulación añadiendo tres apartados relativos a los sistemas de denuncia internos. Concretamente, se impone la obligación a los distribuidores de seguros y reaseguros de disponer de procedimientos adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través de un canal *“independiente, específico y autónomo”*. Asimismo, la modificación establece la necesidad de que dichos procedimientos sean confidenciales, para garantizar la falta de represalias frente a los empleados que informan.

Se mantiene sin cambios la remisión al sistema de medidas de control especial, en el artículo 200 (cfr. artículo 61 de la LMS).

Más novedoso resulta el artículo 201 (publicación de sanciones y otras medidas). En la LMS, concretamente en su artículo 53.2, se preveía que la DGSFP podría dar publicidad a resoluciones de cancelación de la inscripción en caso de existir peligro de continuación en la actividad, y luego se recogían en las distintas posibles sanciones la de *“publicidad”* de las mismas. En el artículo 201 del RDL 3/2020 se añade una derivada: la necesidad de que toda sanción o medida administrativa (por ejemplo, una medida de control especial) impuesta y que haya resultado firme (en vía administrativa, según aclaró el segundo borrador de Anteproyecto de la Ley de Distribución de Seguros) habrá de ser publicada, salvo que, tras una evaluación previa la DGSFP de Pensiones, se considere que (a) pudiera ser desproporcionada o pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades o personas físicas sancionadas, o pongan

en peligro (b) la estabilidad de los mercados financieros o (c) investigaciones en curso².

Se trata de una previsión que traslada el contenido del artículo 32 de la DDS pero que, a nuestro modo de ver, casa muy mal con el hecho de que se mantenga la publicidad como sanción per se (es decir, puede no imponerse la sanción de dar publicidad a la infracción, pero a la vez resultar obligado publicitar la misma a tenor del artículo 201).

El artículo 202 (transmisión de información sobre sanciones y otras medidas a la AESPJ) recoge los principios de la DDS sobre colaboración con la AESPJ habilitando un flujo de información entre la DGSFP y la AESPJ respecto de sanciones y medidas impuestas, pero no publicadas, incluyendo información anual y comunicación a la AESPJ de cualquier sanción que deba ser divulgada o publicada.

² En este caso el artículo 201 prevé una lista de medidas adicionales que se pueden acordar en caso de que concurra uno de los citados supuestos:

- a) diferir la publicación hasta el momento en que dejen de existir los motivos que justifiquen tal retraso;
- b) publicar la sanción impuesta de manera anónima, cuando dicha publicación garantice la protección efectiva de los datos personales de que se trate; en este caso, la publicación de los datos pertinentes podrá aplazarse por un periodo razonable de tiempo si se prevé que en el transcurso de ese periodo dejarán de existir las razones que justifiquen una publicación con protección del anonimato;
- c) no publicar la sanción impuesta cuando considere que dicha publicación de conformidad con las letras a) y b) sería insuficiente para garantizar que no se ponga en peligro la estabilidad de los mercados financieros, o la proporcionalidad de la publicación en relación con las infracciones cometidas.”

8. Actividad de los mediadores de seguros y reaseguros domiciliados en España en régimen de libre prestación de servicios o derecho de establecimiento en otros Estados de la UE

El RDL 3/2020 separa por primera vez las disposiciones aplicables al ejercicio de actividad en régimen de LPS (artículo 169) y las correspondientes al ejercicio de actividad en régimen de DE (artículo 170), si bien ambos artículos son prácticamente idénticos entre sí.

En cuanto al ejercicio de la actividad en régimen de LPS (artículo 169), el RDL 3/2020 regula por primera vez la información específica previa que deberá proporcionar el mediador a la DGSFP para poder ejercer en LPS en otro Estado miembro, información recogida hasta ahora en el Protocolo de Cooperación de las Autoridades Competentes de los Estados Miembros de la UE en relación con la aplicación de la DMS.

En concreto, el mediador tendrá que proporcionar a la DGSFP la siguiente información: (i) nombre, dirección y número de registro; (ii) Estado o Estados en cuyo territorio tenga previsto operar; (iii) clase de mediador y, cuando proceda, identificación de las entidades aseguradoras o reaseguradoras a las que represente; y (iv) ramos de seguros en los que tenga previsto realizar la actividad de distribución.

Como ocurría con la LMS, una vez proporcionada la información previa a la DGSFP, ésta la comunicará a la autoridad competente del Estado Miembro de acogida en el plazo de un mes. No obstante, la DGSFP podrá negarse a realizar la comunicación en caso de dudar de la estructura organizativa o de la situación financiera del mediador, en cuyo caso la DGSFP deberá informar por escrito, de manera motivada, y en el mismo plazo de un mes, de las concretas razones que justifican la negativa a informar a la autoridad del Estado Miembro de acogida.

Una vez comunicada la información, la DGSFP tendrá que informar por escrito al mediador de que la autoridad competente del Estado Miembro ha recibido la información sobre el

mediador y de que, por tanto, está autorizado para ejercer su actividad en dicho Estado miembro desde ese mismo instante. La DGSFP tendrá que informar también al mediador de que, a fin de ejercer las actividades de distribución en el Estado Miembro de acogida, deberá cumplir las disposiciones nacionales adoptadas por motivos de interés general, que estarán publicadas en la página web de la AESPJ.

Respecto del ejercicio en régimen de DE, el artículo 170 prevé prácticamente las mismas disposiciones que para la actividad en régimen de LPS, con algunos pequeños matices.

El mediador tendrá que proporcionar a la DGSFP la misma información que cuando quiera operar en LPS, con la diferencia de que también tendrá que informar de la dirección de la sucursal que tenga en el Estado miembro en el que vaya a operar y tendrá que identificar a la persona responsable de la gestión de la sucursal o establecimiento permanente.

Por otro lado, el RDL 3/2020 prevé que, transcurrido un mes desde la comunicación de la información a la autoridad competente del Estado Miembro de acogida sin que ésta envíe a la DGSFP la información sobre las disposiciones nacionales adoptadas por motivos de interés general, la DGSFP podrá informar al mediador de que puede iniciar su actividad en el Estado miembro de acogida.

Por último, el RDL 3/2020 añade que *“se asimilará a una sucursal toda presencia permanente de un mediador en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea que sea equivalente a una sucursal”*. Por tanto, cuando un mediador español tenga presencia permanente en otro Estado Miembro de la UE, aunque no sea una sucursal en sentido estricto, se entenderá que está operando en régimen de DE y, por tanto, tendrá que cumplir con los requisitos y obligaciones legalmente establecidas para actuar en dicho régimen.

9. Actividad en España de los mediadores de seguros y reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados de la UE. Normas de interés general aplicables a los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados Miembros de la Unión Europea

Actividad en España de los mediadores de seguros y reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados de la UE

El RDL 3/2020 prevé las mismas reglas generales que la LMS para los mediadores residentes o domiciliados en otros Estados de la UE que quieran ejercer la actividad de distribución de seguros en España, con dos salvedades. Por un lado, el mediador podrá ahora iniciar su actividad en España una vez que la autoridad competente del Estado miembro de origen le haya informado de que puede iniciar su actividad (sin esperar un mes desde dicha notificación) y, por otro lado, dicha autoridad competente deberá también informar al mediador de las normas de interés general que deberá cumplir en territorio español.

En su artículo 207, el RDL 3/2020 introduce una importante novedad respecto de la LMS en cuanto al reparto de competencias entre las autoridades de los Estados miembros. En concreto, se prevé que si la DGSFP detecta que el principal centro de actividad del mediador está en España, podrá acordar con la autoridad competente del Estado miembro de origen actuar como dicha autoridad en lo que atañe a (i) los requisitos necesarios para poder ejercer como distribuidor de seguros; (ii) obligaciones de información y normas de conducta; (iii) requisitos adicionales de información en relación a los productos de inversión basados en seguros; y (iv) sanciones y otras medidas. En caso de existir este acuerdo la autoridad competente del Estado miembro de origen deberá notificarla al mediador y a la AESPJ lo antes posible.

Por otro lado, la DGSFP asume en todo caso la competencia de garantizar que los servicios en España sean conformes al RDL 3/2020 (artículo 208) y a las normas adoptadas por motivos de interés general (artículo 209), pudiendo revisar

y exigir cambios en las medidas que tomen los mediadores para cumplir dichas normas.

De conformidad con el artículo 208, la DGSFP estará capacitada para requerir a los mediadores que acomoden su actuación al ordenamiento jurídico y tendrá comunicación directa con la autoridad competente del Estado Miembro de origen para informar de la incorrecta actuación del mediador, de cara a que se tomen las medidas oportunas para que el mediador cumpla con el ordenamiento jurídico español.

En caso de que la actuación contraria al ordenamiento jurídico español por parte del mediador persista, la DGSFP podrá tomar medidas de control especiales con el fin de prevenir nuevas irregularidades, estando facultada para sancionar dichas irregularidades y para impedir que el mediador siga realizando actividades de distribución en España. En todo caso, la medida tomada por la DGSFP deberá ser comunicada en un documento debidamente justificado al mediador y se notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la AESPJ y a la Comisión Europea. Por último, como medida alternativa se prevé la posibilidad de que, de cara a resolver las posibles irregularidades, la DGSFP remita el asunto a la AESPJ y solicite su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento UE nº 1094/2014.

En cuanto al cumplimiento de las normas de interés general, el artículo 209 legitima a la DGSFP para tomar las medidas necesarias para que los mediadores de seguros cumplan con dichas normas, sin la necesidad de que dichas medidas se comuniquen previamente a la autoridad competente del Estado miembro de origen.

En caso de que la actividad de un mediador de seguros con residencia o domicilio social en España ponga seriamente en peligro el buen funcionamiento del mercado asegurador español, la DGSFP podrá adoptar las medidas adecuadas necesarias para impedir que el mediador lleve a cabo actividades en territorio español. Dichas medidas deberán ser comunicadas con carácter previo a su adopción en todo caso a la autoridad competente del Estado miembro de origen. Se prevé también

la posibilidad de remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento UE nº 1094/2014.

Por último, el artículo 210 prevé las mismas medidas de intervención que la DGSFP y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tenían de conformidad con la LMS. Por un lado, la DGSFP tomará razón de la cancelación de un mediador de seguros en el registro administrativo de su país de origen, y podrá publicitar dicha cancelación en caso de considerarlo necesario. Por su parte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá sancionar a los mediadores con las siguientes precisiones: (i) la cancelación de la inscripción se asimila a la prohibición de que siga operando en territorio español; (ii) la iniciación y decisión del procedimiento sancionar se comunicará a las autoridades supervisoras del Estado Miembro de origen para que tomen las medidas que consideren apropiadas para evitar la actuación infractora del mediador; y (iii) se considera cargo de administración o dirección de las sucursales al apoderado general y demás personas que dirijan dicha sucursal.

Normas de interés general aplicables a los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados Miembros de la Unión Europea

El RDL 3/2020 introduce una importante novedad respecto de la LMS. Se prevén unas normas de interés general que deberán cumplir los mediadores domiciliados en otros Estados miembros de la UE que operen en España.

Tendrán la consideración de normas de interés general todas las disposiciones relativas a las obligaciones de información y normas de conducta, así como las relativas a requisitos adicionales de información en relación con los productos de inversión basados en seguros.

Estas normas serán publicadas, en todo caso, por la DGSFP en su página web.

10. Breve mención a algunas Disposiciones Transitorias, Finales y Derogatoria

Aunque no vamos a analizar todas las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales del RDL 3/2020, sí creemos conveniente hacer una breve referencia al régimen transitorio que en dicha norma se estipula.

En primer lugar, el RDL 3/2020 otorga a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante su Disposición Transitoria Segunda (*"Régimen de adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras"*), un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para (i) solicitar la inscripción en el registro administrativo de la persona –o las personas que formen parte del órgano de dirección– responsable de las actividades de distribución; (ii) cumplir con las obligaciones del RDL 3/2020 relacionadas con la llevanza de un registro actualizado en el que consten los empleados involucrados en la distribución así como el responsable o los miembros del órgano responsable de la misma; y (iii) cumplir con las obligaciones previstas en el RDL 3/2020 en materia de políticas y procedimientos internos. En este sentido, conforme al RDL 3/2020, se tendrá a esta persona o personas miembros del órgano de dirección responsable de la distribución de las entidades aseguradoras (así como los mencionados empleados que participen directamente en sus actividades de distribución) como habiendo superado los requisitos de formación inicial exigidos en el RDL 3/2020, siempre que ya desempeñaran dichos cargos en el momento de entrada en vigor de la misma.

Asimismo, conforme a la Disposición Transitoria Tercera (*"Régimen de adaptación de los mediadores de seguros"*), los mediadores de seguros y reaseguros que estuvieran registrados a la fecha de entrada en vigor del RDL 3/2020 en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP no deberán registrarse nuevamente. No obstante, según dicha disposición los mediadores tendrán tres meses desde la entrada en vigor del RDL 3/2020 para adaptarse a su obligación de acreditar que los fondos pertenecientes a sus clientes son

transferidos a través de cuentas de clientes completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador.

Por otro lado, según la Disposición Transitoria Cuarta (*"Contratos de seguros preexistentes"*), el RDL 3/2020 no será de aplicación a los contratos de seguro suscritos con anterioridad (pero sí a aquellos contratos que sean objeto de novación extintiva una vez haya entrado en vigor el RDL 3/2020).

En cuanto a los contratos de mediación y distribución de seguros celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 3/2020, permanecerán en vigor en todos sus términos, antigüedad y condiciones, si bien la Disposición Transitoria Quinta del RDL 3/2020 (*"Contratos de mediación y distribución vigentes a la entrada en vigor"*) prevé que habrán de adaptarse según corresponda a las nuevas obligaciones de información y normas de conducta que les resulten aplicables.

Sin embargo, el RDL 3/2020 no prevé –como sí hacía el Proyecto de Ley en sus disposiciones transitorias– que los distribuidores de seguros dispongan del plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor para cumplir las obligaciones de información y las normas de conducta reguladas en el RDL 3/2020. Por tanto, ha de entenderse que cualquier obligación de información y norma de conducta regulada en el RDL 3/2020 será de obligado cumplimiento para los distribuidores de seguros a partir de la entrada en vigor del RDL 3/2020.

Por otra parte, más allá del referido régimen transitorio, el RDL 3/2020 ya no incluye ninguna modificación al régimen de prescripción de infracciones previsto en la LOSSEAR, como no obstante sí preveía antes el Proyecto de Ley en sus disposiciones finales (en particular, se disponía el reinicio de los plazos de prescripción interrumpidos en lugar de su reanudación).

En cuanto a la entrada en vigor del RDL 3/2020 en lo referente a sus disposiciones de normativa de seguros, será el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, conforme a la Disposición Final Decimoquinta del RDL 3/2020, su artículo 139.2 no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa que lo

desarrolle en materia de formación. Mientras no se apruebe dicha normativa de desarrollo, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán garantizar que sus empleados que participen directamente en actividades de distribución, así como la persona –o la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección– responsable de las actividades de distribución, cumplen con los requisitos mínimos en materia de competencia y conocimientos profesionales establecidos en el anexo XII del RDL 3/2020.

Por último, como era de esperar, el RDL 3/2020 –conforme a su finalidad y a lo previsto en su Disposición Derogatoria Única– deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la anterior, y en particular, la LMS. Sin perjuicio de lo anterior, continuarán en vigor hasta que se apruebe la normativa de desarrollo del RDL 3/2020 en materia de formación y de información estadístico-contable y del negocio: (i) el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la LMS en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional; así como, (ii) la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la DGSFP, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y reaseguros privados.



Comments on implementation of the Directive 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on Insurance Distribution

On 4 February 2020, the Council of Ministers of the Spanish Government approved the Royal Decree-Law 3/2020, dated 4 February, on urgent measures transposing into Spanish law various European Union (“EU”) Directives in the field of public procurement in certain sectors; private insurance; pension plans and funds; taxation and tax litigation (the “RDL 3/2020”).

Among the different Directives that are transposed by this regulation, we highlight the transposition into Spanish law of Directive 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on Insurance Distribution (the “IDD”) whose objectives are (i) to lay down the rules concerning the taking-up and pursuit of the activities of distribution of insurance and reinsurance distribution; (ii) to regulate the conditions in which such distribution activity shall be carried out; and (iii) to establish the applicable supervision regime. The new regulation sets out the requirements that shall be complied with by the insurance and reinsurance distributors to adapt to the IDD concerning product oversight and governance requirements, conflicts of interest and transparency rules, especially when it comes to insurance-based investment products.

The purpose of this Note is to comment on the main novelties introduced by the RDL 3/2020 whilst implementing the IDD with respect to the previous regime of the repealed Act 26/2006, of 17 July, on Insurance and Reinsurance Mediation (“LMS”).

1. Scope (objective and subjective). Classification of distributors (intermediaries and insurance undertakings) and external collaborators

Purpose and scope

According to Article 129.1 of the RDL 3/2020, “insurance distribution” shall be understood as “any activity involving advice, proposal or activities prior to the execution of insurance contracts, the execution of insurance contracts or assistance in the management and performance of such contracts, in particular, in the event of a claim; including the provision of information related to one or more insurance contracts in accordance with the criteria selected by the clients through a website or other media, as well as the compilation of an insurance product ranking list, including price and product comparison, or a discount on the price of an insurance contract, when the customer is able to directly or indirectly conclude an insurance contract using a website or other media.” Besides, the reinsurance distribution activity is defined as “the activities of advising on, proposing, or carrying out other work preparatory to the conclusion of contracts of reinsurance, of concluding such contracts, or of assisting in the administration and performance of such contracts, in particular in the event of a claim, including when carried out by a reinsurance undertaking without the intervention of a reinsurance intermediary”.

Thus, the definition of insurance distribution is extended to the activity carried out by the insurance comparison sites, who shall be subject to the RDL 3/2020 in those cases where their activity implies the possibility for the client of entering into an insurance contract, either directly or indirectly. In practice, most of comparison sites help users go to another website where they can take out the insurance contract recommended by the comparison site, so it is foreseeable that most of the sites will be subject to the RDL 3/2020. It is worth to note that the insurance comparison sites are not an independent regulatory status. Insurance comparison sites shall take the form of any of the existing regulatory status (mainly insurance agents or insurance brokers).

The main novelty of the RDL 3/2020, with respect to the repealed LMS, is that it applies, not only to insurance and reinsurance intermediaries, but also to insurance and reinsurance undertakings when they carry out direct insurance distribution activities (that is, insurance distribution through their own employees) or direct reinsurance distribution activities (that is, without the intervention of reinsurance brokers).

Another important innovation of the RDL 3/2020 is that it clarifies which activities shall not be deemed insurance or reinsurance distribution activities (most of which were up to the date in a grey zone): (i) the provision of information on an incidental basis in the context of another professional activity where the provider does not take any additional steps to assist in concluding or performing an insurance or reinsurance contract (for instance, a lawyer who advises his client on an insurance product); (ii) the management of claims of an insurance undertaking or of a reinsurance undertaking on a professional basis, loss adjusting and expert appraisal of claims (that is, the companies to which insurance companies outsource the claims handling shall not be insurance intermediaries, which solves an existing controversy); (iii) the mere provision of data and information on potential policyholders to insurance intermediaries, reinsurance intermediaries, insurance undertakings or reinsurance undertakings where the provider

does not take any additional steps to assist in the conclusion of an insurance or reinsurance contract (that is, the introducers); (iv) the mere provision of information about insurance or reinsurance products, an insurance intermediary, a reinsurance intermediary, an insurance undertaking or a reinsurance undertaking to potential policyholders where the provider does not take any additional steps to assist in the conclusion of an insurance or reinsurance contract; and (v) the activity carried out by the leading insurance undertaking in co-insurance transactions.

Finally, as regards its scope, the RDL 3/2020 maintains the exemption applicable to those individuals or companies other than a credit institution or an investment firm who, for remuneration, take up or carry out the activity of insurance distribution on an ancillary basis, provided that their principal professional activity is other than insurance distribution; they only distribute certain insurance products that are complementary to a good or service; and the insurance products concerned do not cover life assurance or liability risks, unless that cover complements the good or service which the intermediary provides as its principal professional activity. These individuals or companies, known as “ancillary insurance intermediaries”, shall be exempt from complying with the RDL 3/2020 (that is, the RDL 3/2020 will not apply to them) when all the following conditions are met: (i) the insurance is complementary to the good or service supplied by a provider, where such insurance covers the risk of breakdown, loss of, or damage to, the good or the non-use of the service supplied by that provider; or damage to, or loss of, baggage and other risks linked to travel booked with that provider; (ii) the amount of the premium paid for the insurance product does not exceed EUR 600 calculated on a pro rata annual basis or the premium paid by person does not exceed EUR 200 when the duration of the service indicated in section (i) above is equal or shorter than three months). However, in those cases where the ancillary insurance intermediaries are exempted from the application of the RDL 3/2020, the intermediary or insurer for whom the ancillary

insurance intermediary is working shall comply with certain information obligations.

Classification of insurance distributors and external collaborators

According to Article 134 of the RDL 3/2020, both intermediaries and insurance undertakings are deemed “*insurance distributors*”. In addition, the references contained in the RDL 3/2020 shall be understood as also made to ancillary insurance intermediaries who are not exempted from the application of the RDL 3/2020 (that is, those who do not comply with the requirements listed in the previous paragraph).

There are different categories of insurance intermediaries: (i) insurance agents; (ii) bank-assurance operators (although they are not included in the classification set out in Article 135 of the RDL 3/2020, on the grounds that they are insurance agents); and (iii) brokers. Insurance intermediaries, ancillary insurance intermediaries and reinsurance brokers shall be duly registered with the Insurance and Reinsurance Distributors’ Register of the General Directorate of Insurance and Pensions Fund (“DGSFP”).

Insurance agents are defined (Article 140 of the RDL 3/2020) as any natural or legal person who, by entering into an agency agreement with one or more insurers, undertakes to carry out the distribution activity for such insurers under the terms contractually agreed.

As regards brokers, they are defined (Article 155 of the RDL 3/2020) as the natural or legal persons who pursue the insurance distribution activity on an independent basis, offering advice based on an objective and personal analysis to those demanding the cover of risks.

Bank-assurance operators (“BAO”) (Article 150 of the RDL 3/2020) are defined as those credit institutions, financial institutions and corporate entities controlled or owned by the former that enter into insurance agency contracts with one or more insurers, committing towards such insurers to distribute the insurance products using their distribution networks.

Like in the repealed LMS, insurance intermediaries may have recourse to external collaborators for the distribution of

insurance products. The regulation of external collaborators (Article 137 of the RDL 3/2020) is very similar to that contained in LMS. The main characteristics are the following: (i) there is only one type of collaborator (the external collaborator), whose functions –broader or narrower– shall be expressly regulated under the contract entered into with the intermediary; (ii) the external collaborators shall pursue their activity under the direction, liability regime (administrative, civil and professional) and financial capacity of the intermediary for whom they work; (iii) external collaborators must identify themselves as such when dealing with the policyholders and insured and shall indicate the name and details of the intermediary they are collaborating with; (iv) the insurance intermediaries shall keep an internal register of external collaborators, which must be at the DGSFP’s disposal; (v) external collaborators shall meet the commercial and professional honourability requirements (novelty of the RDL 3/2020), and shall comply with the training requirements established under the applicable regulation; and (vi) the RDL 3/2020 maintains the incompatibilities regime for external collaborators, who are only entitled to collaborate with insurance intermediaries of the same type. The RDL 3/2020 has removed the last sentence of Article 8.4 LMS, which was kept in the first Draft of the new Insurance Distribution Act, whereby an external collaborator of an insurance intermediary could not collaborate with other intermediaries of different type to the intermediary with whom he first signed a collaboration agreement. This absurd provision prevented a collaborator who had initially signed an agreement with an agent from collaborating with a broker in the future, which had no sense in our opinion. The new wording is more logical, as it does not tie the collaborator forever to the intermediary who first hired him. Instead, he will only be prevented from working at the same time for an agent and a broker.

2. Activity of the insurance distributors

As indicated in the Explanatory Memorandum of the RDL 3/2020, this RDL implements in Spain the IDD, which has a wider scope than the Directive of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on Insurance Mediation (“IMD”), with the ultimate aim of providing consumers with the same level of protection despite the differences between distribution channels. Obviously, in order to achieve this objective, the RDL 3/2020 needs to cover not only insurance intermediaries, but also other channels through which customers buy insurance products.

Consequently, the RDL 3/2020 intends to regulate all the insurance distribution activity, not only the insurance intermediation, since not only insurance intermediaries are considered distributors. Insurance undertakings (which fell out of the scope of the repealed LMS) and other market participants who sell insurance products on an ancillary basis (such as travel agents, car rental companies and comparison sites) are also deemed insurance distributors.

Insurance distribution by insurance undertakings

For the first time, insurers are included amongst the insurance distributors. Thus, the RDL 3/2020 regulates the insurance distribution activities carried out by the insurance undertakings. In particular, Article 138 of the RDL 3/2020 states that the employees of the insurance undertakings may promote the subscription of insurance contracts on behalf of the insurer for whom they work.

For these purposes, Article 139.5 of the RDL 3/2020 requires each insurer to keep an internal register, subject to the DGSFP’s control, where all the employees directly involved in the insurance distribution, as well as the person responsible for the distribution activity or the persons composing the managing body responsible for the distribution activity, shall be duly registered. Such persons shall also be registered with the Insurance and Reinsurance Distributors’ Register of the DGSFP regulated under Article 133 of the RDL 3/2020. These details shall be submitted to

the DGSFP telematically, in the way required by said regulator.

Insurance undertakings shall ensure that all these persons comply with the commercial and professional honourability requirements as defined under Article 128 of the RDL 3/2020 and that they meet the training requirements established under said RDL and its developing regulation. In this regard, insurers shall provide these persons the necessary means to ensure a continuous training adapted to the products distributed, to the functions and to the activities carried out. The documents regarding the training programs, which shall comply with the principles and guidelines established by the DGSFP, shall be at the regulator’s disposal.

In addition, in line with the general increase of compliance requirements, insurance undertakings are required (Article 139.4 of the RDL 3/2020) to approve, implement and regularly review their internal policies and appropriate internal procedures so as to ensure the fulfilment of all the aforesaid obligations. For such purposes, insurers shall identify a function to ensure the proper implementation of the endorsed policies and procedures. Insurance undertakings shall, upon request, make available the name of the person responsible for that function (it does not have to be exclusive, that is, the person may simultaneously have other compliance activities) to the DGSFP.

Insurance distribution by intermediaries

General provisions applicable to all intermediaries

As previously indicated, the RDL 3/2020 regulates the activity of all the insurance distributors, distinguishing between insurance undertakings, intermediaries and ancillary insurance intermediaries. As said, insurance intermediaries are classified as follows: (i) insurance agents, (ii) BAO and (iii) brokers. Article 136 of the RDL 3/2020 contains certain general provisions which are applicable to all intermediaries.

As opposed to Article 6 LMS, which established the general obligations that shall be complied with by all intermediaries, the RDL 3/2020 now establishes certain prohibitions too. That is,

instead of regulating the obligations that all intermediaries shall fulfil (regardless of their category), the legislator has preferred to specify what intermediaries cannot do.

Firstly, those persons who are not authorised to carry out commercial activities cannot possibly act as insurance intermediaries. In addition, those persons who are linked to the intermediary in such a way it may jeopardise the freedom of the potential policyholders in the decision of the insurance product or in the choice of insurer cannot participate in the insurance distribution.

The activities that intermediaries cannot carry out are listed below:

- a) Covering risks or indemnifying losses covered under the insurance contract.
- b) Distributing products of insurers or reinsurers who do not comply with the requirements needed to carry out business in Spain or who exceed the limits of the authorisation granted (for instance, when an insurance undertaking authorised to carry out business in Spain on a freedom of services –“FOS”– basis in a specific class on insurance commercialises products of other insurance classes).
- c) Using expressions reserved to insurance and reinsurance undertakings in their corporate name and marketing materials.
- d) Adding surcharges to insurance premiums charged by the insurers.
- e) Entering into insurance contracts on behalf of a client without the latter’s consent.

Like in Article 6.2 LMS, insurance intermediaries shall be deemed to be depositary of the premiums paid by their clients and of the indemnities or premium reimbursements made by the insurers. However, Article 136.4 of the RDL 3/2020 establishes a relevant novelty with respect to LMS which consists in the obligation of insurance intermediaries to hold the clients’ funds in separate accounts from the rest of their economic resources (also highlighted in the Explanatory Memorandum of the RDL 3/2020).

Insurance agents

General regime

The RDL 3/2020 does not introduce significant changes regarding the regulation of insurance agents. The regulation of common aspects to all types of agents is broadened in Subsection 3rd (insurance distribution activity carried out by insurance agents and BAO) of Chapter III, Title I of the RDL 3/2020.

Thus, it is stated (Article 140) that agents are natural or legal persons who, through entering into an agency agreement with one or more insurers, undertake to engage in insurance distribution activities in accordance with the provisions of such agreement (Article 141), which will always have a commercial nature and will be governed by what the parties freely agree, and, additionally, by Act 12/1992, dated 27 May, on Agency Contract (“LCA”). Services from agents will be remunerated, so the commission or other type of remuneration from the insurer to the agent must be specified in the agreement (no other “*economic rights*” are mentioned, as in Article 11.2 LMS).

On the other hand, agents still cannot promote the change of insurer of the portfolio intermediated by them or carry out acts of disposition on their distribution position without the consent of the insurer, adding that, upon the termination of the agency agreement, the insurer must inform the policyholders of the agreements concluded with the mediation of the leaving agent and, if appropriate, inform of the commencement of the mediation of a new agent. However, it is allowed for the leaving agent to inform “*his clients*”, that is, the policyholders of the insurance contracts concluded with his mediation, of the termination of his agency agreement.

As previously regulated in Article 13.3 of LMS, (although only regarding exclusive agents), it is envisaged in Article 142 of the RDL 3/2020 that, regardless of the type of insurance agent, the amounts paid to the agent by the customer will be considered as delivered to the insurer, while the amounts paid to the agent by the company will not be considered as delivered to

the customer until the customer actually receives them.

Likewise, Article 143.1 of the RDL 3/2020 regulates the professional civil liability of all agents and external collaborators, stating that such civil liability will be attributed to the insurer with which an agency agreement was concluded if it comes from the performance of the former on behalf of the entity (however, Article 143.1 is not applicable to BAOs). Thus, unlike Articles 17 and 23 LMS, insurance entities will be liable not only for the professional liability of their exclusive agents, but also for the professional liability of non-tied insurance agents and of the external collaborators of both kind of agencies. Article 145 establishes (as regards all types of agents) that they may not act at the same time as brokers, external collaborators of brokers, third-experts, insurance experts or commissioners of damages appointed by the policyholders, insured or beneficiaries of the insurance agreements in which they had acted as agents. According to the literal wording of the rule, although the agents could not be external collaborators of brokers, the activity of agent is not considered to be incompatible with that of external collaborator of another agent, exclusive or non-tied.

Lastly, Article 146 of the RDL 3/2020 regulating the regime of communications which was previously regulated in Article 12 of LMS eliminates the obligation for an insurance undertaking to pay off the debt that an insurance agency -with which it intends to contract- might hold against another insurance undertaking of the same class, in the context of activities related to insurance agencies.

Exclusive agents

Exclusive agents shall be registered in the Insurance and Reinsurance Distributors’ Register of the DGSFP. For this purpose, the insurer shall:

- a) Certify that the person responsible for the distribution activity and the members of the management body responsible for the distribution activity, the managers and all the personnel directly involved in the distribution activity, comply with the commercial and

professional honorability requirements as stated in Article 128 of the RDL 3/2020.

b) Certify that the person responsible for the distribution activity or, at least, half of the members of the management body responsible for the distribution activity, and all the personnel directly involved in the distribution activity have the appropriate knowledge and skills by means of passing the training courses, which must be modulated according to the products to be distributed, the role played and the activity carried out.

The DGSFP will establish the general guidelines and basic principles of the training programs, with the insurers being obliged to provide the necessary means which guarantees the continuous training of the agents.

To ensure compliance with the honorability and training requirements, insurers must approve, endorse and periodically review their internal policies and processes. In addition, it is established, with the usual wording - from our view, quite poor- regarding the rules that envisage compliance obligations (the so-called “compliance”), that insurers will determine a “function” (“función”) that guarantees the correct carrying out of those policies and processes, and the name of the person responsible for that function must be available to the DGSFP.

c) Prior to submitting the application for registration in the Insurance and Reinsurance Distributors’ Register of the DGSFP, they must obtain information on shareholders or partners who have a holding or voting rights, representing, directly or indirectly, 10 % or more in the agency; the identities of the persons who have close links with the intermediary; and information that those holdings or close links do not prevent the effective exercise of the supervisory functions of the DGSFP.

Insurers must have and keep up to date the documentation certifying these requirements, and must inform the DGSFP, in the way determined by the regulator, of the changes

in that information within a period of fifteen business days from the amendment agreement.

Besides its registration in the Insurance and Reinsurance Distributors' Register of the DGSFP, Article 147.2 of the RDL 3/2020 establishes that insurers must keep an internal up-to-date register of agents with whom an exclusive agency agreement has been signed (on which shall be recorded, at least, the personal data of the agents, start and end date, exclusive or non-exclusive regime and, in case of a legal person, the person responsible for the insurance distribution activity or the persons comprising the management body of the insurance distribution department). This intern register will be subject to the control of the DGSFP.

As established in Article 14.1 LMS, Article 147.5 of the RDL 3/2020 establishes that the insurer with whom the agent has concluded an exclusive agency agreement may only authorise such agent to enter into an agency agreement with another insurer to operate in insurance, risk or contracts in which the authorizing insurer does not operate. The latter must inform the insurer with which the agent intends to conclude another agreement, in writing, about the terms in which the authorisation is granted and will note it in the DGSFP Register.

Article 148 of the RDL 3/2020 regulates agreements for the assignment of exclusive insurance agents networks along the same lines of Article 4 of the repealed LMS, although it is specified (Article 148.2 of the RDL 3/2020) that it will not be considered as an assignment if it comes to agency agreements concluded between insurers which take part in a group acting on behalf of all or part of the entities of the group, when so agreed. The agency agreement must include the insurance companies which take part in the group.

Non-tied insurance agents

The innovations introduced in the legal regime of non-tied agents do not entail a significant change.

As in the derogated LMS, it is the non-tied agent itself (and not the insurance entity with which has entered into an agency agreement) who shall

apply for its registration before the Insurance and Reinsurance Distributors' Register of the DGSFP. Article 149.3 of the RDL 3/2020 states that, to apply for registration to the DGSFP as a non-tied agent, the following requirements must be met and maintained:

- a) To provide information on shareholders who have a holding or voting rights representing, directly or indirectly, 10 % or more in the agency; the identities of persons who have close links with the intermediary; information that those holdings or close links do not prevent the effective exercise of the supervisory functions of the DGSFP.
- b) To certify that the person responsible for the distribution activity and the members of the management body responsible for the distribution activity, the managers and all the personnel directly involved in the distribution activity, comply with the commercial and professional honorability requirement as stated in Article 128 of the RDL 3/2020,
- c) Certify that the person responsible for the distribution activity or, at least, half of the members of the management body responsible for the distribution activity, and all the personnel directly involved in the distribution activity have the appropriate knowledge and skills by means of passing the training courses, which must be modulated according to the products to be distributed, the role played and the activity carried out.
- d) To submit a report indicating the classes and insurers for which they distribute products, the territorial scope of action and mechanisms for the solution of client complaints. This report shall also contain a mention of the continuous training program referred to in paragraph e) below.
- e) Present an ongoing training program.
- f) Not to incur in incompatibility causes.

The application for registration must be submitted to the DGSFP, which must expressly answer within three months from the submission. The registration will specify the insurers for whom the agent can distribute insurance.

Any amendment on the information provided must be communicated to the DGSFP within a maximum period of fifteen working days from the amendment agreement.

BAO

As indicated in the Explanatory Memorandum of the RDL 3/2020, BAOs are still considered as insurance agents, with certain specifications relating to issues such as professional liability and training obligations for their distribution networks. Although there have been innovations regarding LMS, their regulation has not changed much.

Article 150 of the RDL 3/2020 establishes that credit institutions, financial institutions and corporate entities controlled or owned by either of them (according to Article 160 of the RDL 3/2020), that enter into insurance agency contracts with one or more insurers shall be considered as BAO. The main novelty provided by the RDL 3/2020 is that the limitation of Article 25.1 LMS, according to which a credit or financial institution could only make its distribution network available to a single BAO, has now been removed. By eliminating this restriction, BAOs may enter into service contracts to use the networks of different credit or financial institutions in order to distribute products of the insurers for whom they work.

The RDL 3/2020 has also removed the third paragraph of Article 25.1 LMS, which stated that once the distribution network of a credit or financial institution has been transferred to a BAO, that network cannot be split so that that section takes part of the network of another BAO or external collaborator of another intermediary. With the new wording, there would be no obstacles to dividing the distribution network of a credit institution between several BAOs, although the distribution network will still not be able to be divided to act, or to act directly, as an external collaborator of another intermediary of different type, in accordance with the incompatibility regime foreseen in Article 154.2 of the RDL 3/2020.

It seems that with the elimination of these restrictions, in some way, there is an aim of liberalizing the performance of this type of



intermediaries, so that these are not exclusively linked to the credit institutions controlling the BAO.

Likewise, the second paragraph of Article 150.1 of the RDL 3/2020 states that the services agreement by means of which the assignment of the distribution network is agreed shall be “*reciprocal*”, word that was not included in Article 25 LMS.

For the registration of BAO in the Insurance and Reinsurance Distributors’ Register of the DGSFP, there are some requirements to be met:

- a) To be a credit institution, financial credit institution or a corporate entity controlled or owned by the former or by credit or financial institutions groups, whose bylaws provide for the execution of insurance distribution activities as BAO. These companies must be registered in the corresponding Mercantile Registry prior to the application for registration of the BAO.
- b) To submit a report indicating the classes of insurance and insurers for which they act as insurance distributors, the territorial scope of action, the mechanisms of conflict resolution and the networks for insurance distribution.
- c) To certify that the person responsible for the distribution activity and the members of the management body responsible for the distribution activity, the managers and all the persons directly involved in the distribution activity, comply with the commercial and professional honorability requirement as stated in Article 128 of the RDL 3/2020.
- d) To certify that the person responsible for the activity of insurance or reinsurance distribution or, where appropriate, at least half of the persons forming part of the management body responsible for the distribution activity and all personnel involved in the distribution activity have the appropriate knowledge and skills by means of passing the training courses, which must be modulated according to the products to be distributed, the role played and the activity carried out.

- e) To submit a continuous training plan, according to the general rules and basic principles set by the DGSFP.
- f) To ensure that customers’ monies are separate from the BAO’s and that the amounts paid by the customer are delivered to the insurer, while those paid by the insurer must be delivered to the customer.
- g) To certify that all insurers with which they are to conclude agency contracts will take the professional civil liability from their performance as BAO or that they hold professional liability insurance covering the whole territory of the EU or some other comparable guarantee against liability arising from professional negligence, for the minimum amount, per year, that at the moment establishes the Delegated Regulation (EU) 2019/1935, which will be reviewed and updated according to the European consumer price index by the European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”). These updates will be published through a DGSFP resolution.
- h) To provide information on the identities of shareholders or members, whether natural or legal persons, that have a holding, directly or indirectly, representing a 10% or more of the voting rights or of the capital of the BAO; the identities of persons who have close links with the intermediary; information that those holdings or close links do not prevent the effective exercise of the supervisory functions of the DGSFP.
- i) Not to incur in incompatibility issues

Article 154 of the RDL 3/2020 regulates more accurately the incompatibilities regime for BAOs, who cannot act as external brokers or collaborators of the former, third expert (perito), insurance expert (perito de seguros) or breakdowns commissioner (comisario de averías), appointed by policyholders, insured or beneficiaries.

Finally, Article 160 of the RDL 3/2020 jointly regulates the close links regime and significant holdings for BAOs and insurance brokers (legal persons). This Article states that both types of

intermediaries (in the case of insurance brokers, this only applies for legal persons) should inform the DGSFP of their intention to establish relations with natural or legal persons that may entail close links (according to the definition provided for in Article 128.12 of the RDL 3/2020), as well as the proposed transfer of shares or holdings that could give rise to a significant holdings regime (according to the definition provided for in Article 128.13 of the RDL 3/2020).

The DGSFP will have a period of three months from the submission of the information to oppose to the acquisition of the significant holding or each increase that equals or exceeds the limits of 20%, 30% or 50% or when this way it gives the control to the broker or BAO. However, the DGSFP may only oppose alleging that person who intends to acquire such a significant holding does not meet the requirements of commercial and professional honorability or fits in any prohibition under the RDL 3/2020. If the DGSFP does not expressly pronounce within three-months, the silence should be considered positive.

Insurance brokers

The novelties introduced regarding insurance brokers are not relevant either. The definition in Article 155 of RDL 3/2020 highlights the

performance of the distribution activity independently, offering advice based on an objective and personal analysis to whom may have required the coverage of risks (but without expressly mentioning the requirement of not maintaining contractual links that with insurers, as it was set forth in Article 26.1 of LMS).

For these purposes, the insurance brokers shall inform to any person that may be interested in subscribing an insurance policy, about the terms and conditions of the insurance policy that, in the opinion of the insurance broker, shall subscribe and to offer the coverage that, in the professional opinion of the insurance broker, may fit the better to its client; and shall make sure that the insurance policy meet all the requirements in order to be fully valid and enforceable (Article 155.2 of the RDL 3/2020). Additionally, Article 155.3 of the RDL 3/2020 oblige the insurance brokers to provide the policyholder, insured persons and beneficiaries, during the life of the insurance policy, with any information that these may require about any respect or clause related to the insurance policy subscribed and to provide them with assistance and advice in case of loss.

There are no innovations regarding the brokers fees in the RDL 3/2020, (except for the novelty



in relation with the brokers distributing IBIPS -Article 180.2 of the RDL 3/2020- which will be analyzed separately), which almost literally reproduce for this regard the provisions of Article 29 LMS (in Article 156.5): the broker can only be remunerated by insurance companies through the payment of commissions, being broker and client able to agree that the remuneration of the former includes professional fees that will be invoiced directly to the client. As regards the requirements to be registered in the Insurance and Reinsurance Distributors' Register of the DGSFP (very similar to those required for non-tied agents and BAO), brokers shall:

- a) In the case of insurance brokers who are natural persons, have the legal capacity to engage in business, and in the case of legal persons, must be commercial companies or cooperatives registered in the corresponding Mercantile Registry and register of cooperatives, prior to the application for administrative registration, whose by-laws provide, within the section corresponding to the corporate purpose, for the carrying on of insurance distribution activities as an insurance broker. In the case of stock companies, the shares shall be nominal.
- b) Submit an activities plan indicating the classes and types of risks that are intended to mediate, the guiding principles and the territorial scope of action and the structure of the organization, the personal and material resources it will have available, the mechanisms for resolving conflicts and the three-year income and expenses plan.
- c) Certify that the person responsible for the distribution activity and the members of the management body responsible for the distribution activity, the managers and all the personnel directly involved in the distribution activity, comply with the commercial and professional honorability requirement as stated in Article 128.
- d) Certify that in case of insurance brokers who are natural persons and insurance brokers who are legal persons, the person responsible for the activity of insurance or reinsurance distribution or, where appropriate,

at least half of the persons forming part of the management body responsible for the distribution activity and all personnel involved in the distribution activity, have the appropriate knowledge and skills by means of passing the training courses, which must be modulated according to the products to be distributed, the role played and the activity carried out.

- e) Submit a continuous training plan, according to the general rules and basic principles set by the DGSFP.
- f) Have financial capacity, evidenced by a guarantee or surety insurance, to protect the clients from the risk that the brokers cannot transfer the premium to the insurer or compensation or reimbursement of the premium to the insured. This financial capacity must reach, on a permanent basis, 4 % of the sum of annual premiums received, subject to the minimum amount, per year, that at the moment establishes the Delegated Regulation (EU) 2019/1935, unless it has been contractually agreed with the insurers that the revenues flow between the company and the clients does not pass through the accounts of the company runner.
- g) Have professional liability insurance cover or other financial guarantee covering the broker throughout the EU, for the minimum amount, per year, that at the moment establishes the Delegated Regulation (EU) 2019/1935, amount that shall be regularly reviewed by the EIOPA according to the European index of consumer prices and published by resolution of DGSFP.
- h) Provide and keep up-to-date information on the identities of shareholders or members, who have a holding, directly or indirectly, representing a 10% or more of the voting rights or of the capital of the insurance brokerage the identities of persons who have close links with the intermediary; information that those holdings or close links do not prevent the effective exercise of the supervisory functions of the DGSFP.
- i) Not to incur in incompatibility causes.

Article 159 regulates the incompatibilities regime, distinguishing between brokers that are natural persons (whose activity will be incompatible with that of agents, external collaborators of insurance agents and BAO, and experts, commissioners and liquidators of breakdowns) from brokers that are legal entities (which cannot simultaneously combine this activity with that of insurer or reinsurer, agent or BAO, external collaborator of agent or BAO, other activities that require an exclusive corporate purpose, and acting as experts and commissioners or liquidators of breakdowns, unless they work only for policyholders, insured and beneficiaries). Under this incompatibilities regime, it would be possible, for instance, for a broker natural person to coordinate that activity with that of an employee of an insurer or reinsurer.

Lastly, with regard to the close links regime and significant holding regulated in Article 160 of the RDL 3/2020 in jointly with BAO, we refer to what has been mentioned previously regarding BAOs.

Reinsurance distributors

As for the distribution of reinsurance products, the RDL 3/2020 does not only regulate the figure of reinsurance brokers (like in LMS), but Article 161 also provides for the reinsurance to be distributed by employees of reinsurance entities, to which rules set forth in Subsection 2, Section 1 of Chapter III will be applicable and any references in that section to insurance undertakings shall be deemed to be made to reinsurance undertakings. With regard to reinsurance brokers, their activity is regulated in Articles 162 to 164 of the RDL 3/2020, requiring them to be registered in the Insurance and Reinsurance Intermediaries' Register of the DGSFP with the same requirements as for insurance brokers, except for the one related to the need to certify their infrastructure and financial capacity.

3. Training requirements and conflict resolution mechanisms

Training requirements

On the one hand, in accordance with Article 165 of the RDL 3/2020 the DGSFP is responsible for establishing the general guidelines and principles (in terms of content, organization and execution) of the training courses and finance and private insurance aptitude tests that the persons who participate in the insurance distribution activity have to pass in order to obtain the authorisation to carry out such distribution activity.

In this sense, the DGSFP, based on the minimum knowledge required by the Annex of the RDL 3/2020, issued on 26 July 2018 a draft Resolution (that will replace the Resolution dated 18 February 2011) that will regulate the requirements of the training courses.

On the other hand, in accordance with the provisions of Article 165.2 of the RDL 3/2020, on 26 July 2018 the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation published the Draft Royal Decree developing the RDL 3/2020 regarding the training requirements, (that will replace the Royal Decree 764/2010 dated 11 June) which will regulate (i) the criteria on the knowledge and skills required for insurance and reinsurance distributors and their relevant employees, (ii) how such knowledge and skills are to be assessed and (iii) the requirements that must be met by the entities interested on the organization of the training courses and aptitude tests. These entities will issue a certificate after the completion of the training courses.

Both the Resolution dated 18 February 2011 and the Royal Decree 764/2010 dated 11 June will remain in force until the Draft Resolution of the DGSFP and the Draft Royal Decree are approved. Once approved and in force, both texts will introduce (if approved and published with the current text) some relevant changes on the training requirements. Among others, (i) Group A, Group B and Group C training courses are now named Level 1, Level 2 and Level 3, (ii) the duration of Level 1 training course (former Group A) is reduced from 500 to 300 hours and of Level 3 training course (former Group C) is increased from 50 to 150 hours, which means an increase

of 100 hours of training for external collaborators and employees of insurance and reinsurance distributors who do not provide assessment/advice, (iii) the persons obliged to obtain each level of training change (for example, while non-tied agents were required to have Group A training, they would be now required to have only Level 2 training), and (iv) the requirements for ongoing training are tightened, as while a three-year training plan was previously required, an annual plan is now required.

Regarding the mandatory ongoing courses for distributors, in accordance with Article 165 of the RDL 3/2020 it becomes compulsory for all type of distributors and also such Article establishes (i) that it must be “*personalised*”, in other words, the ongoing training courses must consider the type of distributor, the role they perform, the activity carried out within the insurance or reinsurance distribution and the product distributed and (ii) that must consist on, at least, 15 hours per year.

Finally, according to Article 165.3 of the RDL 3/2020, the authorization granted to training centers by any competent authority will have national effectiveness. The holder of the authorization shall notify the competent authority of its Autonomous Community or the DGSFP, as appropriate, the opening of new training centers.

In short, the novelties introduced seek equalization between the different distributors, as well as a higher level of professionalism. In this sense, it is important to highlight the tougher training requirements for professionals who do not give advice and who only provide information (from 50 to 150 training hours) which are practically equal to the training requirements of those who do give advice (200 hours). Finally, the requirement for annual continuous training at all levels of training (and not only for Group B and Group C as was previously the case) is intended to provide the various professionals with greater knowledge of the products to be distributed.

Conflict resolution mechanisms

Furthermore, as it was already the case with the repealed LMS, Article 166 of the RDL

3/2020 requires insurers, insurance brokers and insurance intermediaries from other EU Member States acting in Spain through under right of establishment –“RE”– or FOS regime) to attend and solve the complaints and claims that the customers can file according to the RDL 3/2020 and the regulations on financial services customer protection.

In addition, insurance undertakings shall attend and solve the complaints and claims regarding the acts of their insurance agents and BAOs (whether tied or non-tied) and also, as a novelty, those regarding their employees when performing distribution activities.

In contrast to the repealed LMS, insurance intermediaries domiciled in other Member States of the EU operating in Spain under FOS regime shall not have a customer service department to deal and solve any claims or complaints. That obligation is imposed to insurance intermediaries domiciled in other EU Member States carrying business under RE regime (through a branch) as well as to insurance brokers, unless they entrust the attention and resolution of complaints and claims to a client's ombudsman. In addition, the performance of the functions of the department or customer service can be outsourced to a person or entity, outside the structure of the organisation, as long as it meets the requirements of the regulations on the protection of the customer of financial services.

Additionally, it is added the possibility of having a common customer service department for different companies of the same economic group.

Like under the repealed LMS, Article 167 of the RDL 3/2020 recognises the possibility for insurance undertakings and insurance brokers of appointing an ombudsman to hear and resolve complaints under its regulation of operation framework and whose decisions shall be binding on the insurer or broker.

Like in the repealed LMS, Article 168 of the RDL 3/2020, allows clients to present their complaints and claims to the competent administrative body in accordance with the procedure established in the regulations on the

protection of the customer of financial services (in our case, the Complaints Department of the DGSFP). As a novelty, the complaints and claims can be presented in accordance with the procedure established in the consumer protection regulations (the pertinent Consumer Information Office). Without prejudice of what it is established for insurers, in order to present complaints and claims relating to the performance of insurance intermediaries resident in Spain and Spanish branches of insurance intermediaries from other countries of the EU to the competent administrative body, the claimants shall prove that he/she has previously filed a complaint or claim, in writing, before the department or customer service of the entity or, as the case may be, before the client's ombudsman.

Finally, the RDL 3/2020 also provides that complaints and claims will in the future be assumed by a financial consumer protection independent authority to be created in accordance with the First Additional Provision of Law 7/2017 dated 2 November, which implements in Spain the Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013.

4. Information duties and conduct rules

General information duties

In line with the IDD's ambition to emphasize customer protection, Article 172 of the RDL 3/2020 sets out three general principles that shall govern the activity of all insurance distributors: (i) distributors shall act at all times honestly, fairly and professionally in accordance with the best interests of the customer; (ii) the information provided to customers or potential customers shall be fair, clear and not misleading and the marketing communications shall be clearly identified as such; and (iii) distributors cannot be paid remuneration that conflicts with their obligation to act in their clients' best interest. In particular, an insurance distributor shall not make any arrangement by way of remuneration, sales targets or otherwise that could provide an incentive to itself or its



employees to recommend a particular insurance product to a customer when the insurance distributor could offer a different insurance product which would better meet the customer's needs. Although these general principles or conduct rules are applicable to the activity of all kinds of distributors, the truth is that, in our view, they fit in better with the brokers' activity (who actually must offer and recommend the products that best suit their clients' needs) than in that of the insurance agents and BAOs.

Regarding the information to be provided by insurance intermediaries, the RDL 3/2020 regulates in its Article 173 the information that must be provided to the potential policyholder prior to the conclusion of the insurance contract.

This Article lists the information that shall be provided by the insurance intermediary, in line with Article 42 of the repealed LMS (identity of the intermediary, registration number, nature of the intermediary –if he is a broker, an agent working for one insurance undertaking exclusively, an agent working for several insurers or a BAO–, if he is acting on his clients' behalf or on behalf of the insurer, data protection treatment, complaints procedure, details about the shares held directly or indirectly in or by an insurer, nature of the remuneration received, etc.). If throughout the term of the insurance contract this information changes, the policyholder shall be informed about such modification.

On a separate matter, the RDL 3/2020 regulates separately in its Article 174 the information to be provided by insurance undertakings to potential customers (although the wording is not clear, we understand that this provision only applies when the insurer is distributing the product directly).

Besides, Article 175 of the RDL 3/2020 requires all insurance distributors (intermediaries and insurance undertakings), basing on the information obtained from the client and on the latter's requirements and needs, to provide the potential policyholder, prior to the execution of the insurance contract, with objective information about the insurance product in a comprehensible form to allow that customer to make an informed decision (the information may

be modulated according to the complexity of the product and the type of client). In addition, where advice is provided prior to the sale of an insurance product, in addition to the duty to specify the customers' demands and needs, a personalised recommendation should be provided to the customer explaining why a particular product best meets the customer's insurance demands and needs. This obligation applies, thus, not only to brokers (who shall carry out an objective analysis) but also to the rest of distributors. Therefore, with the new RDL 3/2020, agents, BAOs and insurers who give advice prior to the conclusion of an insurance contract will also have to explain the potential policyholder why a product best meets his needs.

Article 176 of the RDL 3/2020 specifies how the information on the product shall be provided when it comes to non-life insurance products: it must be contained in a brief and separate document, with a clear structure, in an official language, including certain specific details (summary of the covers, main exclusions...), etc. This document is named "Insurance Product Information Document" (IPID). In this respect, this Article refers explicitly to the Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1469 of 11 August 2017 laying down a standardised presentation format for the insurance product information document. Furthermore, for non-life insurance products for which this Article may be applicable, the RDL 3/2020 provides that it is not necessary to provide the information set out in Articles 122, 125 and 126 of Royal Decree 1060/2015 (ROSSEAR) as this information is already included in the information document to be provided to policyholders as set out in Article 176 of the RDL 3/2020. There is no such a similar Article in the RDL 3/2020 for life-insurance products (only for insurance-based investment products, as we will see), which, in our view, is meaningless (the information provided to the potential policyholder of a life-insurance product should also be reinforced according to the objectives pursued by the IDD).

To sum up, prior to the conclusion of the insurance contract, the potential policyholder should receive two "informative notes": one including information about the insurance

intermediary or about the insurer (if it is the insurer who distributes the product directly) and another (known as "Insurance Product Information Document") including specific information about the insurance product. Article 182 of the RDL 3/2020 explains how these informative notes should be supplied (on paper, in a clear and accurate manner, in an official language of the Member State in which the risk is situated or in any other language agreed by the parties and free of charge).

According to the RDL 3/2020 (Article 177), these informative notes do not have to be provided when it comes to large risks insurance products (as defined in Article 128 of the RDL 3/2020 and Article 11 of Act 20/2015, dated 14 July –LOSSEAR-).

Additional requirements in relation with the distribution of insurance-based investment products

The RDL 3/2020, in line with the IDD, reinforces the information duties in relation to the distribution of insurance-based investment products, given the increased complexity and continuous innovation in the design of these products. As indicated in Whereas 33 of the IDD, buying an insurance-based investment product implies a risk and investors should be able to rely on the information and quality of assessments provided.

Articles 178 to 181 of the RDL 3/2020 regulate, as said, these additional requirements that must be met by the insurance intermediaries and insurance undertakings distributing insurance-based investment products:

1. Prevention of conflicts of interest (Article 179 of the RDL 3/2020)

According to Article 179 of the RDL 3/2020, insurance intermediaries and insurers distributing insurance-based investment products shall take all appropriate steps to identify conflicts of interest between themselves (including their managers and employees, or any person directly or indirectly linked to them by control) and their customers or between one customer and another, that arise in the course of carrying out any insurance distribution activities.

In addition, they shall maintain and operate effective organisational arrangements with a view to preventing the conflicts of interests detected from adversely affecting the interests of its customers. Where the arrangements made by the insurance intermediary or insurance undertaking to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to customer interests will be prevented, the insurance distributor shall clearly disclose to the customer the general nature or sources of the conflicts of interest, in good time before the conclusion of an insurance contract. The disclosure of this information shall (i) be made on a durable medium and (b) include sufficient detail, taking into account the nature of the customer, so as to enable that customer to take an informed decision with respect to the insurance distribution activities in the context of which the conflict of interest arises.

2. Information to be provided to customers (Article 180 of the RDL 3/2020)

Apart from the general information set out under Articles 173 and 174 of the RDL 3/2020, the distributors of insurance-based investment products shall provide the potential policyholder, "in good time prior to the conclusion of the contract" (for general information the RDL 3/2020 only requires the information to be provided "prior to the conclusion") the following minimum additional information: (i) when advice is provided, whether periodic assessments of the suitability of the insurance-based investment products recommended to that customer would be provided; (ii) appropriate guidance on, and warnings of, the risks associated with the insurance-based investment products or in respect of particular investment strategies proposed; and (iii) information on all costs and related charges to be disclosed, information relating to the distribution of the insurance-based investment product, including the cost of advice (among others). In this sense, the RDL 3/2020 establishes that the information about all costs and charges associated to the insurance-based investment product shall be in aggregated form to allow policyholders to understand the overall cost as well as the cumulative effect on

the return of the investment; also, policyholders shall be provided with an itemized breakdown of the costs and charges. This information shall be provided on a regular basis (at least annually). The RDL 3/2020 stresses the importance of providing this information in a comprehensible way, so that the potential policyholder can correctly understand and assess the risks prior to taking out the insurance contract.

As a new relevant highlight, Article 180.2 of the RDL 3/2020 provides that where the policyholder is informed that advice on insurance-based investment products in which he/she bears the investment risk is offered independently on the basis of an objective and personalised analysis, intermediaries (i.e. brokers as they are the only intermediaries who would fit this description) are not entitled to accept or retain any remuneration (fees, commissions or other monetary or non-monetary benefits) from third parties in connection with the distribution of such products (on the understanding that by third parties we should consider any party different from the policyholder and, thus, including insurance undertakings). In the end, the RDL 3/2020 therefore prohibits insurance brokers that distribute insurance-based investment products from receiving any remuneration from third parties different from policyholders, an important change that has not been sufficiently explained, beyond being inspired by MiFID 2 Directive and that would entail severe problems to those insurance brokers distributing this type of insurance products –and whose remuneration they earn from insurance undertakings– that may be forced to in some cases to convert into insurance agents so as to keep their remuneration for the distribution of this type of products. This provision was introduced in the Draft Bill on Distribution of Insurance and Reinsurance Products dated 21 May 2018 but not in the first draft of the Bill. The justification for this insertion can be found at the end of this provision where it is indirectly stated that this would be due to the desire to prevent any type of remuneration from affecting the insurance intermediary's (broker's) compliance with acting with honesty, impartiality, professionalism and in the best interests of his clients.

The aforementioned information duties regulated under the RDL 3/2020 in relation to insurance-based investment products shall be combined with the ones provided for in Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products.

3. Assessment of suitability and appropriateness and reporting to customers (Article 181 of the RDL 3/2020)

According to Article 181 of the RDL 3/2020, when providing advice on an insurance-based investment product, the insurance intermediary or insurance undertaking shall obtain from the potential customer, in addition to the general information set out under Article 172 of the RDL 3/2020, the following information: (i) necessary information regarding the customer's or potential customer's knowledge and experience in the specific type of product; (ii) information about his/her financial situation, including that person's ability to bear losses; and (iii) that person's investment objectives, including his/her risk tolerance, so as to enable the insurance intermediary or the insurance undertaking to recommend to the customer or potential customer the insurance-based investment products that are suitable for that person and that, in particular, are in accordance with that person's risk tolerance and ability to bear losses.

If the distributor does not provide advice (for example, an insurance agency who offers the product without advising the potential customer), he/she shall necessarily ask the potential customer to provide information regarding his/her knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product offered (apart from the general information about the needs and requirements of the potential customer), unless all the requirements set out under paragraph 3 of Article 181 of the RDL 3/2020 are met (i.e., that the distribution activity refers to insurance based investment products (a) which only provide investment exposure to the financial instruments deemed non-complex and do not incorporate a structure which makes it difficult for the

customer to understand the risks involved (b) related to other non-complex insurance-based investments, (ii) that the distribution activity is carried out at the initiative of the customer or potential customer, (iii) that the customer has been clearly informed that, in the provision of the insurance distribution activity, the insurance intermediary or the insurance undertaking is not required to assess the appropriateness of the insurance-based investment product or insurance distribution activity provided or offered and that the customer does not benefit from the corresponding protection of the relevant conduct of business rules and (iv) that the insurance intermediary or insurance undertaking complies with its obligations regarding the prevention and management of conflicts of interest).

If, once obtained the abovementioned information, the distributor considers that the product is not appropriate for the potential customer, he/she shall warn such potential customer to that effect. In addition, if the customer or potential customer did not provide the information requested or provided insufficient information regarding his/her knowledge and experience, the distributor shall warn him/her that he is not in a position to determine whether the product envisaged is appropriate for him.

Thus, as opposed to LMS, the RDL 3/2020 requires distributors commercialising insurance-based investment products to carry out an exhaustive analysis of the suitability and appropriateness of the product for their customer or potential customer. The aim of these new obligations is to prevent, for example, a person with no experience in investment products or whose financial situation is bad from taking out complex insurance products.

5. Cross-selling

For the first time, through Article 184 of the RDL 3/2020 "cross-selling" is regulated and defined as the sale, as part of the same agreement, of an insurance product together with other ancillary products or services which are not insurance ("when an insurance product is offered together

with an ancillary product or service which is not insurance, as part of a package or the same agreement...").

The concept of cross-selling was not defined in the Draft Bill of the Insurance Distribution Act. However, the RDL 3/2020 now defines these concepts in its Article 128, nuancing that cross selling includes tied selling, referring to the cases in which the insurance contract is not offered to the customer separately, and combined selling, referring to the cases in which the insurance contract is offered to the customer separately as well.

In addition to the usual specification of the demands and needs of the customer, the insurance distributor shall inform the customer whether it is possible to buy the different components separately and, if so, shall provide an adequate description of the different components of the agreement or package as well as separate evidence of the costs and charges of each component.

In these circumstances, if the risk or the insurance coverage resulting from such an agreement or package is different from that associated with the components taken separately, the insurance distributor shall provide an adequate description of the different components of the agreement or package and the way in which their interaction modifies the risk or the insurance coverage.

In addition, Article 184(2) of the RDL 3/2020 provides that the insurance distributor shall offer the customer the possibility of buying the good or service separately. This paragraph shall not apply where an insurance product is ancillary to an investment service or activity, a credit agreement or a payment account.

For the sale of these packages or agreements, the RDL 3/2020 also imposes certain information obligations on distributors prior to contracting them. In particular, the insurance distributor shall inform the customer expressly and comprehensibly (i) that a cross-selling is taking place; (ii) of the products or services' share of the total cost; (iii) of the effects of contracting them or of the early termination would have on the

joint cost; and (iv) of the differences between the joint and separate offer of those products.

It must be pointed out that the DGSFP is empowered to take measures, including prohibiting the sale of insurance together with an ancillary service or product which is not insurance, as part of a package or the same agreement, when it can demonstrate that such practices are detrimental to consumers.

Finally, it should be taken into account that this Article does not apply to the distribution of multi-risk insurance policies, i.e. insurance policies that covers multiple risks at once is not considered a package or agreement for the purposes of the cross-selling.

6. Product oversight and governance requirements

In accordance with Article 25 of the IDD, Article 185 of the RDL 3/2020 requires insurers and intermediaries which manufacture any insurance product the design, establishment, maintenance, operation and review of a process for the approval of each insurance product previous to its commercialisation and to follow the ongoing of the product during its commercialisation. In addition, the process shall be proportionate and appropriate to the nature of the insurance product.

The process shall specify and identify target market for each product and ensure that all relevant risks to such identified target market are assessed. The intended distribution strategy and the identified target market shall be consistent, and reasonable steps to ensure that the insurance product is distributed to the identified target market will be taken.

This control will be applied not only before the commercialisation of the product but also during its commercialisation through regularly reviews of the product to ensure that the product remains consistent with the needs of the identified target market and that the distribution strategy remains appropriate.

If the insurer undertakes the product all the information regarding the product and the product approval process must be available

for distributors (in order to ensure distributors obtain all the information needed to understand the characteristics and identified target market of each insurance product).

Large risks insurance contracts will not be affected by the requirements established under Article 185 of the RDL 3/2020.

7. Rules and supervision competencies

General State Administration Competencies

Subsection 1 of Section 7 of Chapter III of the Second Book rule does not follow the scheme of the repealed LMS, given that the matters concerning regional competencies have been moved, as we saw, to Chapter III of Title I of the RDL 3/2020's Second Book. Thus, Article 186 states that, except for the powers expressly attributed to the head of the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation, the DGSFP shall have the power to exercise the control regulated in Title I. Specifically, it may require *“the documentation and information”* that is necessary for a proper monitoring and control of the market, as determined by the regulations or by individualised requirements. Thus, that Article 186 almost completely corresponds to Article 48 of LMS, with the addition of its point 5 (*“The Directorate-General of Insurance and Pension Funds will inform the Commission of any general difficulties its insurance or reinsurance distributors find to establish or engage in insurance or reinsurance distribution undertakings of a third country”*), whose origin is traced in the DMS (Article 1, in fine).

The correspondences continue with LMS in Article 187 (accounting obligations and duty of statistical and accounting information), which essentially transfers the contents of Article 49 of LMS, also making reference to the additional commercial or tax obligations in this matter to which insurance and reinsurance brokers may be subject. Likewise, Article 188 (duty of professional secrecy) transfers the contents of Article 50 LMS faithfully, except for a correction

of style on breaking down into three points that was developed in two.

Article 189 (duty of collaboration with other supervisory authorities) is developed however more than its referent in LMS, 51, precisely because at this point the IDD is equally more extensive (vide Article 13). Thus, the collaboration between supervisors, in particular for the flow of information on the good reputation and fitness of the intermediaries and, where appropriate, the possible sanctions or other administrative measures that may be imposed. In addition, it is intended to provide information to EIOPA on intermediaries that have reported intention to carry out cross-border activities. Finally, the standard is completed with a forecast of internal information exchange, this time between DGSFP, Bank of Spain and the CNMV (acronym for *Comisión Nacional del Mercado de Valores* - Spanish National Securities Market Commission), the latter agencies the Administrative Centre will report *“when in the exercise of its competencies it becomes aware of possible irregularities in the marketing of financial products or services that are the subject of cross-selling along with insurance products, in order to coordinate the supervision proceedings with such authorities”*.

Article 190 (cancellation of the registration of the Insurance and Reinsurance Distributors' Register) transfers again in its most literal content of an old article of LMS, Article 53. The notes that distinguish one from another are minor, disappearance of references to assistants-advisers, for example, or with a different emphasis in terms of the magnitudes to be taken into account for the inactivity that translates into a lack of initiation or cessation of exercise that can lead to loss of authorization in the case of brokers (rise of the turnover figure of the insurance intermediary from EUR 30,000 to EUR 100,000 –EUR 500,000 for reinsurance intermediaries-, all this by reference to distributed premiums), technical correction which by the way is to thank as it does put many professionals who are struggling to forge ahead with small portfolios heavily penalized by the Great Crisis Financial in a predicament.

Responsibility vis-à-vis the Administration and regime of offences and penalties

The corrections inaugurated by Article 191 (offender subjects) are mostly technical, improving the wording of Article 54.1 of LMS. The two fundamental changes –the first otherwise implied in the wording of Article 8 of LMS, is decreeing responsibility vis-à-vis the administration of the intermediaries for the action of their external collaborators, and referring to the responsibility of “the persons responsible for the distribution activity”, a reference that reaches an indeterminate universe of possible responsible within the insurance companies. So in this point we must make a cautious interpretation.

Article 192 details the catalogue of offences, in correlation therefore with Article 55 LMS, maintaining the classic typology in Spanish sanctioning law of very serious, serious and minor. If we look at each one of these blocks, we detect that:

- **Very serious** offences are, almost without exception, maintained. Remarkable are:
 - (a) the inclusion of a specific time limit in the infringement referred to in paragraph (h) after which repeated failure to comply with the decisions issued by the DGSFP is considered a very serious infringement. It is considered to be repeated *“when a decision is not complied with and the request is not met within the time limit laid down in the request itself or, failing that, within one month of the request being made to that effect by the DGSFP”*.
 - (b) the changes in the inclusion in letters k) and l), which divide letter k) of LMS; in particular letter (k) makes a specific reference to Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 key information documents for packaged retail and insurance-based investment products, while letter (l) refers to disclosures relating to insurance products other than those referred to in letter (k).
 - (c) that the brokers, whose very serious offence in LMS - letter (l)-, is condensed into “the loss of independence”, now see their

reference included in the same letter (l), but referred to the “repeated failure to comply with the obligation to carry out an assessment based on an objective and personal analysis”;

(d) the disappearance of the reference to the delegations to the external assistants, letter (u) of LMS;

(e) the disappearance of the reference “unless such acts are of a merely occasional or isolated nature” from point (o) of LMS on abusive practices;

(f) the appearance of the “inscription of the registration foreseen in Article 133 of this act under false statements or by any other means”, and

(g) the inclusion of the offence of failure to inform “the customer or injured third party by the insurance intermediary of the identity of the insurance undertakings covering his professional indemnity or, where appropriate, of the identity of the insurance undertaking with which the professional indemnity insurance is concluded or the undertaking providing equivalent cover and of the guarantor of his financial capacity”.

– **Serious offences** follow the same trail of continuity, with some differences, corresponding to what has been indicated above:

(a) the disappearance of the reference to “merely occasional or isolated” performance in the former Article 55(3)(a) of LMS in the new Article 192(3)(a) and (d).

(b) if letter (d) of Article 55.2 of the LMS alluded to the “loss of independence” of the brokers, letter (d) of the RDL 3/2020 points to the default “of the obligation to carry out an assessment based on an objective and personal analysis”; and

(c) the “accuracy” that ought to preside over the performance of the intermediary in the LMS is translated in the RDL 3/2020 into fulfilment of the “information obligations and standards of conduct”.

– The regulation on **minor offences** is modified similarly, stating that they consist on “breaches of regulations... or of the requirements established in them”, thus eliminating the reference to those “occasional or isolated” infringements.

Former Article 58 of LMS (prescription of offences and penalties) is divided into two articles, Article 193 and Article 197 (concerning prescription of offences and penalties, respectively), the content of which is practically identical to Article 58 of LMS, with one difference: the prescription of serious offences and penalties is now four years instead of three.

Article 194 of the RDL 3/2020 is perhaps the one that has attracted the attention of the observers in the early stages of the trajectory

of the current regulation ([vid. http://www.expansion.com/empresas/2017/01/23/5885fca946163f1a098b45d9.html](http://www.expansion.com/empresas/2017/01/23/5885fca946163f1a098b45d9.html)), whereby it has been described as an increase in fines or “increased punishments³, inspired by what occurred in the banking world:

³ Article 194 of the RDL 3/2020 provides that, in the event of very serious and serious infringements, the penalty of publication of the infringement may be imposed in addition to any of the other penalties.

Type of offence	Penalty in the RDL 3/2020		Penalty in the LMS
Very serious	<p>Legal entities: In any case, one of the following sanctions will be imposed:</p> <p>1. In general:</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €1,000,000 or 3% annual turnover, or (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p> <p>B. In the case of insurance intermediaries, supplementary insurance intermediaries or insurance brokers, cancellation of their registration or suspension from exercising their activity for a maximum period of 10 years.</p> <p>C. Publication of the infringement, indicating the identity of the offender and the penalty imposed.</p>	<p>Natural persons: In any case, one of the following sanctions will be imposed:</p> <p>1. In general:</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €100,000 (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p> <p>B. In the case of insurance intermediaries, supplementary insurance intermediaries or insurance brokers, cancellation of their registration or suspension from exercising their activity for a maximum period of 10 years.</p> <p>C. Publication of the infringement, indicating the identity of the offender and the penalty imposed.</p>	€15,001 to €30,000 (common to natural and legal persons)



Type of offence	Penalty in the RDL 3/2020	Penalty in the LMS	
	<p>2. In particular (non-compliance of reporting obligations and standards of conduct on insurance-based investment products):</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €5,000,000 or 5% annual turnover (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p> <p>B. Prohibit the marketing of the insurance-based investment product.</p> <p>c. Cease the marketing of the insurance-based investment product.</p> <p>D. Prohibit the provision of the key data document and require a new version of the document.</p>	<p>2. In particular (non-compliance of reporting obligations and standards of conduct on insurance-based investment products):</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €700,000 (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p> <p>B. Prohibit the marketing of the insurance-based investment product.</p> <p>C. Cease the marketing of the insurance-based investment product.</p> <p>D. Prohibit the provision of the key data document and require a new version of the document.</p>	
Serious	<p>Legal entities: One of the following sanctions will be imposed:</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €500,000 or 1% annual turnover (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p>	<p>Natural persons: One of the following sanctions will be imposed:</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €50,000 (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p>	€6,001 to €15,000 (common to natural and legal persons)

Type of offence	Penalty in the RDL 3/2020	Penalty in the LMS	
	<p>B. In the case of insurance or reinsurance intermediaries, suspension from exercising its activity for a maximum period of one year.</p> <p>C. Publication of the infringement and the penalty imposed.</p>	<p>B. In the case of insurance or reinsurance intermediaries, suspension from activity for a maximum period of one year.</p> <p>C. Publication of the infringement and the penalty imposed.</p>	
Minor	<p>Legal entities: One of the following sanctions will be imposed:</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €100,000 or 1% annual turnover (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p> <p>B. Private warning.</p>	<p>Natural persons: One of the following sanctions will be imposed:</p> <p>A. Fine for the higher of the following amounts: (i) €10,000 (ii) twice the amount of the profit made or the loss avoided by the infringement, if ascertainable.</p> <p>B. Private warning.</p>	Up to €6,000 (common to natural and legal persons)

It is also possible to observe, in this way, on the one hand, the introduction of a parameter that is very common in modern penalising Administrative Law, as is the “*total annual turnover*”, on which rules are fixed to allow its determination in the different specific circumstances that might occur (cases of companies that rely on matrices used to draw up consolidated financial statements, etc.).

As for the catalogue of possible sanctions for serious infringements, the sanction of “*public reprimand*” has been eliminated. As for the possible sanctions in minor infractions, there are no changes, maintaining the old “*private admonition*” within the possible penalties for minor offences, whose practical meaning is either sympathetic or inefficient for the intended purpose.

Article 195 of the RDL 3/2020 (responsibility of those with positions in administration or the person responsible of the distribution activity or who form part of the management body responsible for the distribution activity in the insurers and reinsurers, insurance agencies, BAOs, insurance brokerage companies and reinsurance brokerage companies) follows the systematic of Article 57 of LMS, extending this responsibility to both de facto and de jure administrators. Notwithstanding this amendment, this Article does not present anything particularly new except for an increase in fines, consistent with what has been seen above. Thus, fines of EUR 30,001 to 60,000, become fines of EUR 200,000 (in very serious offences), and fines of up to EUR 30,000 up to EUR 100,000 (in serious offences). A minimum limit is also added to the sanction of “*removal from the position with disqualification*”

from holding any administrative or managerial position in any insurance mediation or reinsurance brokerage company”, which previously was foreseen for a maximum period of 10 years and now is also foreseen for a minimum period of “not less than five years”.

The criteria of classifying penalties are contained in Article 196, in an advance in relation to LMS, which did not contain anything similar. Thus, aggravating and mitigating circumstances to be taken into account are contained: severity and duration of the offence, the degree of responsibility, financial strength, importance of benefits or losses avoided for customers or third parties, level of cooperation, measures taken to prevent the offence from being repeated and previous history of offences committed.

Some of them require a reading and comment, due to their novelty in our system:

- “The financial soundness of the natural or legal person responsible, as reflected either in the annual income of the natural person responsible, or in the total turnover of the legal person responsible”. It is an exhibition of what the Anglo-Saxons call the “deep pocket”, as a criterion of attribution of responsibility. The penalty will be more or less substantial in terms not only of the action contrary to law, but of the ability of the party administered to pay the fine, a principle that appears to us to have been used with many nuances and reserves in our system.
- “The importance of the benefits obtained or the losses avoided by the natural or legal person responsible, to the extent that it can be determined”. A manifestation in Spanish law of a kind of punitive damages: the punishment shall be bigger (or smaller) based on the benefit or loss obtained by the offender. As the previous one, while sharing its nature as a novel contribution under the principle of modern penalising administrative law, this classification criterion must be welcomed with many nuances and even criticised.
- “The level of cooperation of the natural or legal person responsible with the competent authority”. It is another classification criterion that gives rise to

speculation: the incrimination of other offenders can reach an agreed solution to leave intact the offender-complainant? It is, at least, a possibility.

In Article 198 (administrative competencies) of the RDL 3/2020, the system of Article 59 of the repealed LMS has been reformulated to indicate that there will be a civil servant instructor the DGSFP in charge of the administrative penalty procedure, under the responsibility of the Director General of the DGSFP, maintaining the distribution of imposition of penalties of LMS (major and minor, DGSFP, very serious, Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation at the proposal of the DGSFP).

Regarding the reference to the sanctioning regime for insurance (and reinsurance entities, as the title of the Article should read), in Article 199 (formerly Article 60 of LMS), the regulation is amended by adding three paragraphs regarding internal reporting procedures. In particular, an obligation is imposed on insurance and reinsurance distributors to have appropriate procedures for their employees to report infringements internally through an “independent, specific and autonomous” channel. The amendment also establishes the need for such procedures to be confidential, in order to ensure that there is no retaliation against reporting employees.

Referrals to the system of special control measures, in Article 200 (vide Articles 60 and 61 of LMS) are maintained.

More ground-breaking is Article 201 (publication of penalties and other measures). In LMS, specifically in its Article 53.2, it was envisaged that the DGSFP could publicize resolutions on cancellation of the registration in case of danger of continuation in the activity, and they were then included in the possible different penalties of “publicity” of the same. Article 201 of the RDL 3/2020 adds a derivative: the need for any penalty or administrative measure (for example, a special control measure) imposed and that if definitive (in administrative review, as clarified in the second draft of the RDL 3/2020) must be published, unless, following a prior assessment by the DGSFP, it is considered

that (a) it would be disproportionate or would cause disproportionate damage to the entities or natural persons sanctioned, or it would jeopardise (b) the stability of the financial markets or (c) ongoing investigations⁴.

This is a forecast that transfers the contents of Article 32 of the IDD, but in our view ties in very poorly with the fact that publicity is maintained as a sanction per se (in other words, the sanction of publicizing the offence cannot be imposed, but at the same time publicizing it is compulsory according to Article 201).

Article 202 (transmission of information on sanctions and other measures to the EIOPA) takes up the principles of the IDD on collaboration with EIOPA, enabling a flow of information between the DGSFP and EIOPA regarding sanctions and measures imposed, but not published, including annual information and communication to EIOPA on any penalty to be disclosed.

⁴ In this case, Article 201 provides a list of additional measures that can be agreed in the event of one of the above cases:

- postponing publication until the reasons justifying the delay no longer exist;
- publish the penalty imposed in anonymous form, where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned; in this case, publication of the relevant data may be postponed for a reasonable period of time if it is anticipated that, within that period, the reasons justifying the publication in anonymous form will cease to exist;
- not to publish the penalty imposed where it considers that publication in accordance with points (a) and (b) would be insufficient to ensure that the stability of financial markets is not jeopardised, or that the proportionality of the publication in relation to the offences committed is not compromised.”

8. Activity of the insurance and reinsurance intermediaries domiciled in Spain under freedom to provide services and under freedom of establishment in other EU states

The RDL 3/2020 separates for the first time the provisions applicable to the carry out activity under FOS (Article 169) and those under DE (Article 170). However both Articles are practically identical.

As regards to the activity under FOS (Article 169), the RDL 3/2020 regulates for the first time the specific information that the intermediary must provide to the DGSFP in order to carry out its activity under FOS in another Member State. This information was contained so far in the Protocol Relating to the Cooperation of the Competent Authorities of the Member States of the European Union in Particular Concerning the Application of the IMD.

In particular, the intermediary will have to provide the DGSFP the following information: (i) the name, address and, where applicable, the registration number of the intermediary; (ii) the Member State or Member States in which the intermediary intends to operate; (iii) the category of intermediary and, where applicable, the name of any insurance or reinsurance undertaking represented; and (iv) the classes of insurance in which it plans to carry out the distribution activity.

Following the path of the repealed LMS, once provided the prior information to the DGSFP, the DGSFP would communicate it to the competent authority of the host Member State within one month. Nevertheless, the DGSFP may refuse to make the communication in the event it has reason to doubt about the adequacy of the organizational structure or the financial situation of the intermediary and, in such cases, the DGSFP shall inform about the specific reasons that give rise to the refusal within the same one-month period.

Once the information has been communicated, the DGSFP will have to inform the intermediary in writing that the competent authority of the Member State has received the information about the intermediary and that it is authorised to carry out its activity in that Member State from that moment. The DGSFP will also have to inform the intermediary that, in order to operate in the host Member State, it must comply with the national rules adopted on grounds of general good, which will be published on the EIOPA website.



Regarding the activity of distribution under RE regime, Article 170 provides for the same regulation applicable to FOS regime with some small nuances.

The intermediary will have to provide the DGSFP with the same information as when operating under FOS, with the difference that it will also have to report the address of the branch in the Member State in which it is going to operate. It will also have to give the name of any person responsible for the management of the branch or permanent presence.

On the other hand, the RDL 3/2020 provides that after one month from the communication of the information to the competent authority of the host Member State without the competent authority having sent to the DGSFP the information on national rules adopted on grounds of general good, the DGSFP may inform the intermediary that he may begin its activity in the host Member State.

Finally, the RDL 3/2020 adds that “Any permanent presence of an intermediary in the territory of another Member State that is equivalent to a branch should be treated in the same way as a branch”. Therefore, when a Spanish intermediary has permanent presence in other EU Member State, even if it is not a branch in the strict sense, it will be understood that it is operating under the RE regime and that will

have to comply with the legal requirements and obligations to operate under said regime.

9. Activity in Spain of the insurance and reinsurance intermediaries domiciled in other EU States. General good rules applicable to the insurance and reinsurance intermediaries resident or domiciled in other EU Members

Activity in Spain of the insurance and reinsurance intermediaries domiciled in other EU States

The RDL 3/2020 provides the same general rules as the repealed LMS for intermediaries resident or domiciled in other EU Member States who wish to carry out insurance distribution activities in Spain, with two exceptions. On the one hand, the intermediary may now commence its activity once the competent authority of the home Member State has informed the intermediary that he/she can start his activity (without the need of waiting a month after such notification). On the other hand, the competent authority must also inform the intermediary of the general good provisions that it must comply in the Spanish territory.

In its Article 207, the RDL 3/2020 introduces an important innovation with regards to the repealed LMS on the division of competences

between the authorities of the Member States. Specifically, if the DGSFP detects that the principal place of business of the intermediary is located in Spain, it may agree with the competent authority of the home Member State to act as such authority with regard to (i) the necessary requirements to be able to operate as an insurance distributor; (ii) information requirements and conduct of business rules; (iii) additional requirements in relation to insurance-based investment products; and (iv) sanctions and other measures. In the event of such an agreement, the competent authority of the home Member State shall notify the insurance intermediary and EIOPA without delay.

On the other hand, the DGSFP takes in any case the responsibility for ensuring that the services provided by the Spanish establishment comply with the RDL 3/2020 (Article 208) and with the general good provisions (Article 209), being able to review and request changes in the measures adopted by the intermediaries to comply with these.

According to Article 208, the DGSFP may request the intermediaries to tailor the measures endorsed to the applicable national legal provisions and shall directly communicate with the competent authority of the home Member State regarding the irregularities committed in order to take the appropriate measures to ensure that the intermediary complies with the Spanish legal system.

In the event that the intermediary persists in its non-compliance of the Spanish legal system, the DGSFP may take appropriate measures to prevent further irregularities, including sanctions and preventing the intermediary from continuing to carry out business in Spain. Any measure adopted by the DGSFP shall be communicated to the intermediary in a well-reasoned document which shall be also notified to the competent authority of the home Member State, to EIOPA and to the Commission without undue delay. Alternatively, the DGSFP may refer the case to EIOPA and request its assistance in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1094/2010.

Regarding compliance of the general good provisions, Article 209 entitles the DGSFP to

take the appropriate measures to ensure that the intermediaries comply with such rules, without the need to communicate such measures in advance to the home Member State.

In case the activity of an insurance intermediary with residence or registered office in Spain seriously endangers the proper functioning of the Spanish insurance market, the DGSFP may adopt the necessary appropriate measures in order to prevent the intermediary from continuing to carry out business in Spain. Such measures shall be communicated previously to the competent authority of the home Member State. The possibility of referring the matter to EIOPA and requesting its assistance in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1094/2010 is also foreseen.

Finally, Article 210 provides the same intervention measures that the DGSFP and the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation had with LMS. On the one hand, the DGSFP will take account of the cancellation of an insurance intermediary in the administrative registry of its home Member State, and may advertise such cancellation if deemed necessary. For its part, the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation may sanction the intermediaries with the following details: (i) the cancellation of the registration is assimilated to the prohibition to operate in Spain; (ii) the initiation and decision of the sanctioning proceeding will be communicated to the competent authority of the home Member State in order to take the measures deemed appropriate to prevent the intermediary to persist in its infringing behavior; and (iii) the general representative and the persons running the branches are considered as managers and directors.

General good provisions applicable to the insurance and reinsurance intermediaries resident or domiciled in other EU Members

The RDL 3/2020 introduces an important innovation. It provides specific general good provisions that shall be complied with by intermediaries operating in Spain.

The general good provisions shall include all provisions regarding information requirements and conduct of business rules, as well as those additional requirements in relation to insurance-based investment products.

These rules will be published by the DGSFP on its website.

10. Brief mention of certain Transitory, Final and Derogatory Provisions

Although we will not analyse all the Additional, Transitory and Final Provisions of the RDL 3/2020, we understand it is worth to make a brief reference to the transitory regime established thereunder.

In this regard, as of the Second Transitory Provision of the RDL 3/2020 (*“Adaptation regime applicable to insurance and reinsurance undertakings”*), within three months of its entry into force, insurance and reinsurance undertakings shall (i) apply to register the person –or persons comprising the managing body– responsible for the distribution activities; (ii) comply with the obligations set forth in the RDL 3/2020 related to maintaining an updated register of the employees participating in insurance distribution and the person or members of the managing body responsible for said distribution; and, (iii) comply with the obligations of the RDL 3/2020 as regards policies and appropriate internal procedures. In this same sense, the RDL 3/2020 sets forth that the person or members of the managing body responsible for the distribution of insurance undertakings (as well as the abovementioned employees that directly participate in distribution activities) shall be deemed as compliant with the initial training requirements of the RDL 3/2020, as long as said persons were already carrying out said roles before the entry into force of the RDL 3/2020.

Likewise, according to the Third Transitory Provision of the RDL 3/2020 (*“Adaptation regime applicable to insurance intermediaries”*), the insurance intermediaries who were registered with the Insurance and Reinsurance Distributors’ Register of the DGSFP on the date the RDL 3/2020 entered into force do not need to register again. Nonetheless, as of said provision, insurance intermediaries have three months since the entry into force of the RDL 3/2020 to adapt to their obligation of transferring their customers’ monies via strictly segregated customer accounts and ensuring that those

accounts are not used to reimburse other creditors in the event of bankruptcy.

On another hand, as of the Fourth Transitory Provision of the RDL 3/2020 (*“Pre-existing insurance contracts”*), it shall not apply to the insurance contracts that were entered into before it came into effect (except for those contracts which undergo an extinguishing novation after the RDL 3/2020 enters into force).

As refers to insurance mediation and distribution agreements entered into before the entry into force of the RDL 3/2020, they will be kept in force as regards all their terms, duration and conditions; although the Fifth Transitory Provision of the RDL 3/2020 (*“Insurance mediation and distribution agreements in force on the date of entry into force”*) provides that they shall adapt to any new information requirements and conduct business rules as applicable thereof under the RDL 3/2020.

Notwithstanding the previous, the RDL 3/2020 does not provide –as did the Draft Bill in its transitory provisions– that insurance distributors may have three months since its entry into force to comply with any information requirements and conduct business rules as regulated therein. Hence, it shall be deemed that under the RDL 3/2020 any information requirement and conduct business rule applicable to insurance distributors shall be complied with since the date of entry into force of the RDL 3/2020.

Furthermore, besides the transitory regime commented above, the RDL 3/2020 no longer provides any amendment to the statute of limitations for infringements set forth in the LOSSEAR (as did the Draft Bill before in its final provisions, which in particular provided for the reset of interrupted periods).

The RDL 3/2020, in terms of its provisions regarding insurance distribution, will be deemed as having entered into force on the day after its publication in the State Official Gazette. Nonetheless, as of the Fifteenth Final Provision of the RDL 3/2020, its article 139.2 shall not be deemed as having entered into force until the approval of its developing regulations regarding training requirements. For as long as any such developing regulation is not approved, insurance

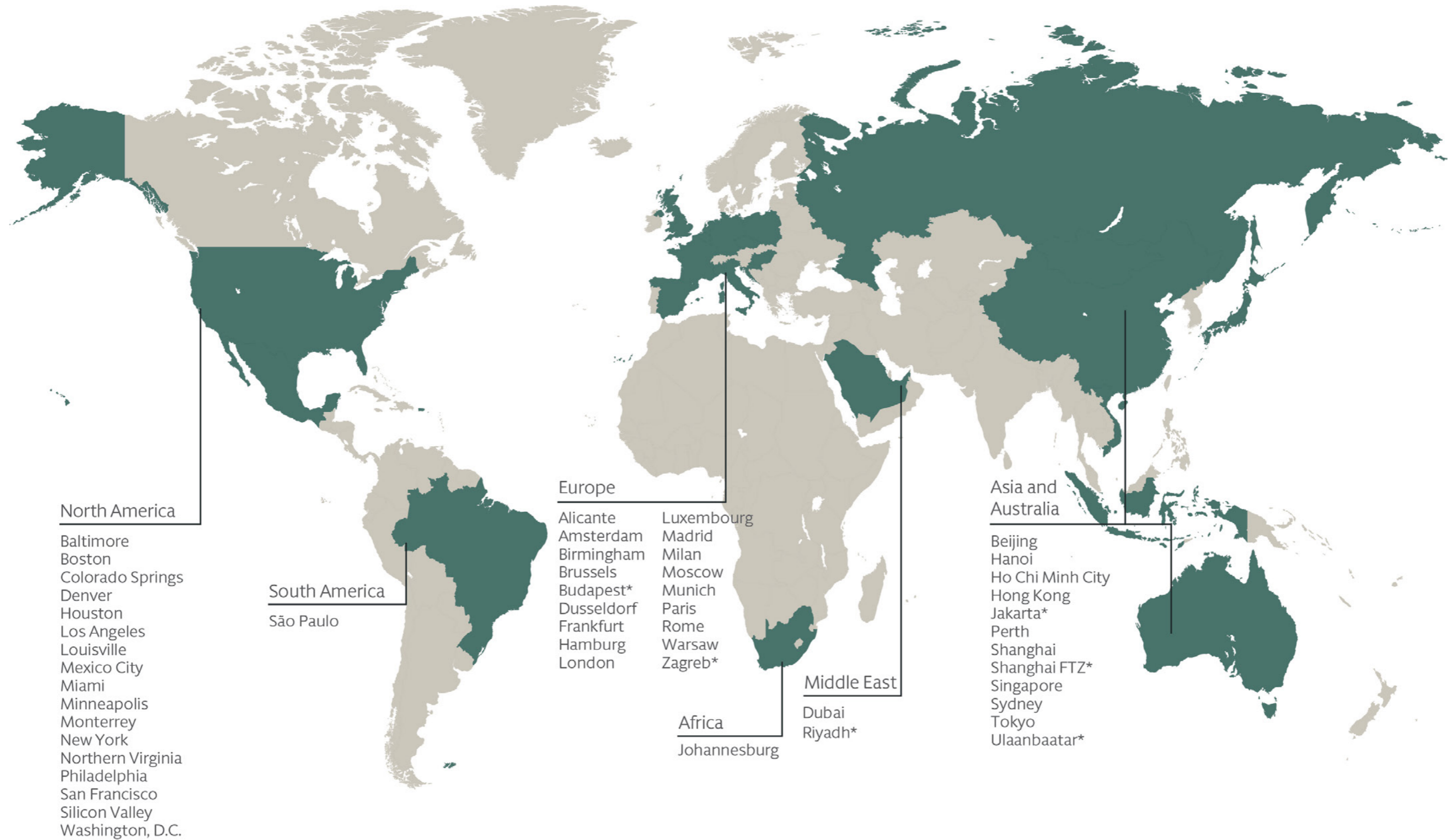
and reinsurance undertakings shall guarantee that their employees participating in insurance distribution and the person or half of the members of the managing body responsible for said distribution, comply with the minimum requirements in matters of professional knowledge and competence.

Lastly, as was expected, the RDL 3/2020 –in line with its purpose and with its Derogatory Provision– sets out that any provision of equal or lower ranks that contradicts what it established in the RDL 3/2020, and LMS in

particular, is derogated. Notwithstanding, the following shall be deemed as kept in force until the developing regulations of the RDL 3/2020 as regards training requirements and statistical-accounting and business information are approved and enter into force: (i) Royal Decree 764/2010, of 11 June, which develops LMS in terms of statistical-accounting and business information, as well as professional knowledge and competence; and (ii) the DGSFP’s Resolution dated 18 February 2011 on training requirements.



Oficinas / Offices



Alicante
Amsterdam
Baltimore
Beijing
Birmingham
Boston
Brussels
Budapest*
Colorado Springs
Denver
Dubai
Dusseldorf
Frankfurt
Hamburg
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Houston
Jakarta*
Johannesburg
London
Los Angeles
Louisville
Luxembourg
Madrid
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Moscow
Munich
New York
Northern Virginia
Paris
Perth
Philadelphia
Riyadh*
Rome
San Francisco
São Paulo
Shanghai
Shanghai FTZ*
Silicon Valley
Singapore
Sydney
Tokyo
Ulaanbaatar*
Warsaw
Washington, D.C.
Zagreb*

* Our associated offices

Legal Services Center: Berlin

www.hoganlovells.com

"Hogan Lovells" or the "firm" is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

For more information about Hogan Lovells, the partners and their qualifications, see www.hoganlovells.com.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients. Attorney advertising. Images of people may feature current or former lawyers and employees at Hogan Lovells or models not connected with the firm.

© Hogan Lovells 2020. All rights reserved.